

Lo que más temo para las generaciones futuras no son las revoluciones.

Si los ciudadanos siguen reconcentrándose más y más estrechamente en el círculo de los pequeños intereses domésticos y agitándose sin descanso, se puede temer que acaben por hacerse inaccesibles a esas grandes y poderosas conmociones públicas que trastornan los pueblos, pero que los desarrollan y renuevan. Al hacerse móvil la propiedad y el amor hacia ella tan inquieto y ardiente, no puedo menos de temer que los hombres lleguen a mirar toda nueva teoría como un peligro, toda innovación como un trastorno, todo progreso social como el primer paso hacia una revolución, y rehúsen enteramente moverse por miedo a que se les arrastre.

—Alexis de Tocqueville

Roger Bartra

Luis Javier Garrido

Adolfo Gilly

Rubén Jiménez Ricárdez

Carlos Pereyra

México: la democracia y la izquierda

La democracia representativa ha sido uno de los grandes temas desdeñados en la tradición histórica de la izquierda mexicana. Calificada, a partir de una cierta lectura del marxismo y del leninismo, como la forma depurada de la dominación burguesa y vivida en un régimen de Estado-Partido sin efectiva competencia electoral, la democracia representativa ha aparecido a los ojos de la izquierda más como desviación de las luchas populares esenciales que como un objetivo con valor por sí mismo.

Esta situación ha cambiado en los años recientes. El crecimiento de la democracia representativa, su profundización en la sociedad, la eliminación de sus vicios, se han convertido en cuestiones centrales en el debate de las corrientes de la izquierda y en prioridades de sus programas políticos. Tratándose de una izquierda tan diversificada como la nuestra, es natural que la asunción de la democracia como problema sea también diversa. Las distintas corrientes de la izquierda valoran la democracia desde perspectivas que no son iguales y la relacionan de diferente modo con otras formas de la acción de masas. Se trata de divergencias no confrontadas con precisión y cuyas expresiones, más que polémicas, han sido oblicuas y descalificadoras.

Por la relevancia que adquiere hoy la cuestión de la democracia y su futuro y para contribuir a la clarificación de un debate indispensable, Cuadernos Políticos ha organizado la discusión que presentamos a nuestros lectores. Los cinco participantes han hecho en los años recientes una aportación relevante al conocimiento de los procesos del poder político, la participación y la democracia en México. Sus puntos de vista, al margen de coincidencias y discrepancias, enriquecen la comprensión de un asunto de interés nacional.

Olac Fuentes Molinar

1

Durante los últimos años, señaladamente después de 1982, el tema de la democracia política y de su defensa se ha convertido en una cuestión central para diversas corrientes de la izquierda y

de grupos de intelectuales. Visto en perspectiva, ello implica un viraje de la preocupación por la revolución hacia la temática de las reformas democráticas. ¿Cuáles son las causas y el significado de este viraje?

Carlos Pereyra

No se trata de un fenómeno exclusivo de nuestro país, sino de una, situación que se da con mayor o menor fuerza en muchas otras sociedades de América Latina y en otras regiones del mundo. Tal vez la causa principal de este viraje se encuentre en la lenta asimilación por parte de la izquierda de la experiencia histórica acumulada en los países del llamado socialismo real. La izquierda ha tenido que hacerse cargo del hecho de que la construcción de regímenes autoritarios allí donde triunfó un proyecto socialista revolucionario, no es resultado sólo de peculiaridades nacionales propias de los lugares donde cristalizó tal proyecto, ni consecuencia sólo de las presiones y amenazas impuestas por las potencias capitalistas, sino producto también de la subestimación de los valores democráticos en la tradición de la izquierda comunista. En tal virtud, el mundo asiste hoy a la constitución de una nueva formación social -para la cual la pertinencia del nombre socialismo es hartamente dudosa- donde la abolición de la propiedad privada y los innegables logros en el ámbito de la igualdad y justicia sociales son desvirtuados por el ejercicio despótico del poder político. De tal modo, procesos de transformación social que en una primera etapa operaron como polo de atracción y estímulo para el movimiento socialista en el mundo entero, hoy tienen significado opuesto y generan la desestima del socialismo en escala mundial. La izquierda ha tenido que asimilar la experiencia histórica de que sin democracia política, la eliminación de la propiedad privada no conduce al socialismo.

Por otra parte, experiencias históricas más cercanas de la propia Latinoamérica mostraron cuán injustificado es el menosprecio de la democracia, erróneamente denominada burguesa en el vocabulario de la tradición comunista. En efecto, el Estado capitalista puede asumir formas democráticas o dictatoriales. La diferencia es, por supuesto, enorme. En la agenda de los movimientos populares no está planteada sólo la tarea de transformar las relaciones capitalistas de producción, sino también de pugnar por la democratización del régimen político. Después de todo, instituciones democráticas elementales como el sufragio universal no aparecieron con el surgimiento del capitalismo, sino después de prolongados esfuerzos de las masas trabajadoras. Si bien la democracia política no depende sólo de la iniciativa popular, pues hay condiciones estructurales que la propician o dificultan, no por ello queda fuera de su horizonte teórico y práctico. La experiencia latinoamericana conforma la tesis de que la dominación burguesa no adopta formas democráticas por su propio impulso y que la introducción de esas formas compete a quienes se ubican en el lado popular y socialista de la confrontación social de nuestros días. No hay democracia burguesa, sino posibilidad de abrir espacios democráticos ya en la sociedad capitalista.

El viraje de la preocupación por la revolución hacia la temática de las reformas democráticas es

efecto del reconocimiento social y político de que la actualidad de la revolución, para emplear la fórmula de Lukács, no es algo dado de una vez y para siempre en el capitalismo contemporáneo. La preocupación por la revolución sólo tiene sentido cuando su posibilidad se encuentra a la orden del día, cuando su actualidad es evidente. La creencia de que esa posibilidad estaba abierta fue en un momento dado, a comienzos de los años veinte, una apreciación histórica equivocada. La creencia de que se trata de una posibilidad permanente, de que la actualidad de la revolución es ininterrumpida, es síntoma de una visión voluntarista y subjetivista de la historia que acompañó por largo tiempo el desarrollo del movimiento comunista internacional. Las revoluciones no se hacen porque haya una fuerza política que se lo proponga; ocurren en virtud de un complejo de circunstancias que desborda la voluntad de una fuerza determinada. Por lo demás, la preocupación por la revolución fue resultado de una comprensión esquemática de la historia, según la cual las transformaciones sociales son siempre resultado de un acto puntual de fuerza y no producto de una serie de puntos de inflexión. Tal idea no tiene fundamento histórico suficiente.

Este viraje tiene un significado decisivo para el desarrollo futuro de las ideas y la práctica socialistas. Hoy es posible afirmar con claridad y contundencia que no se puede construir una sociedad socialista por la vía de la dictadura de un partido sobre el conjunto de la población. Una vanguardia revolucionaria puede en ciertas condiciones históricas tomar a su cargo el control del gobierno del Estado y ejercer el poder de manera absoluta, pero no podrá abrir cauce a una reconstrucción socialista de la sociedad sin la más amplia participación de la enorme mayoría de la población, es decir, sin conformar una nueva hegemonía socialista. La constitución de una hegemonía sólida y duradera pasa por el respeto a los derechos políticos y a las libertades individuales, la autonomía de las organizaciones sociales, el libre debate de ideas, el acceso a la información y el juego plural en elecciones periódicas, es decir, pasa por la democracia política.

Por último, la dinámica política de nuestro país también estimula la creciente preocupación democrática de la sociedad. Numerosos rasgos del sistema político establecido en México determinan este fenómeno. La concentración de poderes desmedidos en la Presidencia de la República, la existencia de un partido oficial que controla el gobierno del Estado de manera ininterrumpida desde hace más tiempo que casi cualquier otro en el mundo, el carácter plebiscitario no competitivo de las elecciones, son algunos de esos rasgos que afectan de manera muy considerable la democracia política lograda en México. La legitimidad del Estado descansó aquí largo tiempo en el cumplimiento del programa de la Revolución de 1910 y en la expansión económica que repercutió —aunque con enormes desigualdades— en las condiciones de vida del conjunto de la población. Desaparecidas esas fuentes de legitimidad en los últimos años, quedaron al desnudo las insuficiencias democráticas del sistema político. Diversos sectores de la sociedad, entre ellos las corrientes más sensibles de la izquierda mexicana, fueron justificadamente atraídos por la temática de las reformas democráticas. No es difícil prever que esta atención se acentuará en el futuro inmediato.

Rubén Jiménez Ricárdez

El advenimiento de ese tema es celebrable por las potencialidades que contiene. A la izquierda revolucionaria, recuperar los valores democráticos le abre la posibilidad de reformular sus objetivos y su práctica, superar su unilateralidad y su deformada tradición autoritaria. Para comprenderlo, basta recordar que los clásicos del pensamiento marxista elaboraron una teoría de la revolución integrada a dos componentes inescindibles: democracia y socialismo. Me refiero a la democracia en el sentido de participación decisiva de las mayorías en los asuntos políticos, tanto en la sociedad como en el interior de los partidos; pero también en cuanto acceso garantizado, para todos, a los satisfactores materiales y a los bienes de la educación y la cultura —es decir: en el sentido de libertad ligada a igualdad; objetivo hacia el cual, como ya lo advierte Tocqueville, "propenden siempre los pueblos democráticos"—. La izquierda reformista, por su lado, viene realizando esa recuperación en la forma de un desplazamiento que implica un abandono paulatino del tema de la revolución y, por consiguiente, su ubicación más clara y precisa dentro del marco institucional. Con ello, este sector se abrió a la posibilidad de establecer una relación nítida entre lo que dice y lo que hace, sin veleidades revolucionarias apoyadas tan sólo en la proclamación ritual de fórmulas ya de antaño vaciadas de contenido y en el mantenimiento de símbolos ya sólo nebulosamente emparentados con una tradición combativa. Sería un acto de saludable coherencia que a una práctica reformista correspondiera un discurso reformista.

Pero el tema de la democracia no es el producto de una reflexión consciente, autocrítica y responsable de la izquierda mexicana. Ese tema cayó sobre ella: lo trajeron los aires que soplan en el ambiente mundial y lo impusieron el clima ideológico del país, el estado de ánimo de grandes porciones de la población y las necesidades de adscripción institucional nacidas de la reforma política. Ese modo de sobrevenir —en un contexto de confusión y de defensiva ideológica— explica quizás la inconsistencia con que la izquierda trata hasta hoy la cuestión de la democracia. Algunas corrientes, arcaicas, la recusan con recelo y desdén "por ser burguesa"; otras influidas por las prédicas de un tardío liberalismo muy en boga, tartamudean concepciones no sólo premarxistas sino incluso pretocquevilleanas. Ocurre que, sacudida por una aguda crisis, la izquierda mexicana parece haber extraviado su identidad y proyecto. No cuenta con estrategias, ni para la reforma ni para la revolución. Casi todas las organizaciones, protagonistas de un contradictorio proceso centrífugo y centrípeto, han realizado experimentos de coordinación y/o fusión y, a la vez, ninguna se ha visto libre de escisiones. Algunas hay que parecen pegadas con saliva, y la mayoría ha visto disminuir su número de militantes. En el terreno político se tornó muy imprecisa la distinción entre revolucionarios y reformistas. Esas categorías —que parecen coexistir dentro de muchos agrupamientos— aún pueden distinguirse en el plano ideológico, por las aspiraciones y por los análisis diferentes del periodo y de las coyunturas. Con todo, la distinción se ha diluido, lo que resulta desfavorable sobre todo para los revolucionarios. Destacan, además, el débil arraigo de la izquierda entre las clases dominadas y la indigencia teórica de la mayoría de las organizaciones. Características, estas últimas, que determinan otros

síntomas de esa crisis: generalización del oportunismo; casi nulo crecimiento electoral; incapacidad para comprender los grandes cambios en curso; abandono de la militancia de base en los centros de trabajo; deterioro moral; confusas políticas de alianzas; etcétera, etcétera.

La crisis de la izquierda mexicana se conecta, profunda y directamente, con una serie de derrotas. Además de la crisis del socialismo real, hay que mencionar el hundimiento de la estrategia estalinista encarnada en los partidos comunistas y, en Europa, los sucesivos fracasos de las estrategias maoísta y eurocomunista. De igual manera, pero más cerca asistimos en América Latina al derrumbe de dos estrategias: la del foquismo y la del reformismo, la cual alcanzó su expresión máxima en el generoso pero insuficiente proyecto de la Unidad Popular chilena. Esas derrotas, que dejaron una estela de tremenda confusión, tuvieron sin embargo consecuencias paradójicas. La superación teórica y práctica de la teoría del "foco" se tornó fundamental para la victoria de la revolución sandinista y también para el avance de la revolución salvadoreña. La derrota de la UP, en cambio, reforzó dentro de un numeroso sector reformista una latente tendencia conservadora. Uno de los teóricos de esta corriente, José Aricó, se encargó de ponerlo en claro: la experiencia chilena condujo al "privilegiamiento de la temática institucional", pero ésta, dijo, "no deriva solamente de todo un sistema de reconversión teórico, sino también del profundo temor a la capacidad de resistencia de las sociedades y a la capacidad de acción de los sectores represivos [...]". El reformismo acentuó así una disposición a buscar los cambios dentro de los márgenes del orden establecido, reconociendo su legalidad y legitimidad y rechazando, en consecuencia, la ruptura revolucionaria. Ésa es una de las vías por las cuales arribó el tema de la democracia. Pero el mismo se viene imponiendo también entre los revolucionarios latinoamericanos, impulsado por la necesidad de reformulación estratégica derivada de la quiebra del foquismo y ante la experiencia de la revolución nicaragüense: una revolución de las mayorías.

Las derrotas mencionadas han influido en las elaboraciones, en el ánimo y en las prácticas de la izquierda mexicana. Pero a ésta la ha golpeado, además, y de manera decisiva, el flujo y reflujo de la lucha de clases en México. En 1976, la derrota de la Tendencia Democrática del SUTERM (y la consecuente caída del FNAP) dejó sin columna vertebral al movimiento de masas que venía en ascenso en esos años, lo dispersó y lo arrojó a una posición defensiva. La derrota del sindicalismo universitario al año siguiente y, luego, la represión sobre otros sectores obreros, las trampas legales, la restricción de derechos, etcétera, las ha empleado el gobierno para mantener esa situación de derrota continua. En el mismo 1976 llegó a su clímax el ascenso ofensivo del movimiento campesino: a partir de entonces sus luchas adquieren, conservándola hasta ahora, una tonalidad defensiva. En este caso la represión ha sido central: según una estimación reciente (basada en información de prensa y, por lo mismo, incompleta), durante el sexenio 1976-1982 hubo cerca de cien ataques masivos a poblaciones campesinas, sin contar masacres como la de Venustiano Carranza, o las que han ocurrido bajo el gobierno de De la Madrid, o el asesinato de militantes y dirigentes (en 1985 la Unión Campesina Independiente denunció que en unos cuantos meses le habían asesinado a más de cuarenta de sus miembros). Hacia 1976, también, el Estado culmina la tarea de aniquilar a la guerrilla rural y urbana. "Este movimiento —se asienta

en uno de los pocos balances hechos hasta ahora- comprometió a varios miles de militantes en todo el país, dejando un saldo de 1 500 muertos, alrededor de mil presos políticos y más de cuatrocientos desaparecidos" (Organización Revolucionaria Punto Crítico, *La izquierda ante la represión y el autoritarismo estatal*, México, 1985, p. 38).

La de 1976 debe ser considerada como una coyuntura clave. La acumulación de derrotas que entonces se verifica resulta imprescindible para comprender la actual situación de la izquierda y una buena parte del panorama político del país. Su acción corrosiva, sin embargo, ha sido insidiosa: o porque tales derrotas fueron subestimadas, o porque —en el mejor de los casos— fueron tratadas casuísticamente, sin atender a su nexo interno y a su valor explicativo. Para profundizar esa derrota múltiple —política, militar, moral e ideológica—, el gobierno mantuvo a lo largo de estos once años una ofensiva permanente: puso en marcha la reforma política; difundió (con éxito sobre un sector de izquierda) el mito de la prosperidad sustentada en el petróleo; presionó y amenazó desde la Secretaría de Gobernación (aún con mayor éxito) a diversas organizaciones de izquierda cuando lo juzgó necesario; vistió con ropaje progresista (con igual éxito) la estatización de la banca; reprimió, desgastó, desorganizó a los movimientos de masas; lesionó sin tregua las condiciones de vida y de trabajo a través de la política de austeridad, de los topes salariales, de las restricciones a las conquistas legales de los obreros y de los campesinos. A partir de 1982, el capital y el Estado recrudecieron su ataque multidimensional contra el pueblo. En esas condiciones —a pesar de luchas numerosas e importantes, las más de las veces sin involucramiento orgánico de la izquierda; de la irrupción espontánea de grandes contingentes; de la crisis de credibilidad gubernamental; de la acumulación de ira popular- no ha sido posible retomar la iniciativa y pasar a la ofensiva.

En ese contexto —al parecer inadvertido para muchos— advino el tema de la democracia. Un sector de la izquierda levanta esa bandera al tiempo que, pausada pero inexorablemente, se aleja cada vez más de los intereses, de las inquietudes, de las luchas y de la vida del pueblo. La democracia, que debería poseer el valor de una noción fundamental, hoy le sirve a la izquierda mexicana para encubrir su confusión ideológica y su incapacidad política. A una izquierda que no está combatiendo consecuentemente, ni por las reformas democráticas ni por la revolución democrática.

Luis Javier Garrido

El tema de la democracia no empezó a discutirse sino tardíamente en México, debido a la cultura política dominante durante las seis décadas de régimen de partido de Estado. De la fugaz experiencia pluripartidista que se ensayó en los años posteriores a la Constitución de 1917 (1917-1929) se pasó a un "sistema" de gobierno que se sustentó en un autoritarismo a la mexicana, paternalista y conciliador, pero que muy rara vez admitió la disidencia a través de los actos: y esto tuvo una repercusión en el comportamiento de todas las fuerzas políticas. La ausencia de mecanismos electorales competitivos fue denunciada por los candidatos de

oposición, pero muy pocos intelectuales plantearon el problema de la naturaleza antidemocrática del régimen. Las principales excepciones las constituyeron Daniel Cosío Villegas (1947), los participantes en la Encuesta Pani (1948), José Revueltas (1958) y Pablo González Casanova (1965), quienes insistieron en algunas de las facetas del problema antes de que éste se convirtiera, a principios de los años ochenta, en una cuestión central a discutir para intelectuales y dirigentes de los partidos de oposición, incluyendo a los de izquierda.

La izquierda mexicana no se planteó antes, de manera clara, las cuestiones de la libertad sindical o de la democracia electoral, sin duda por razones ideológicas, aunque no hay que olvidar que la experiencia cardenista marcó profundamente a muchos líderes: y si algunos de ellos siguieron sosteniendo la tesis de la revolución (la izquierda revolucionaria), otros en cambio pensaron que era más viable impulsar los cambios desde el gobierno y no se preocuparon por los mecanismos de control dentro de las organizaciones oficiales ni por los continuos fraudes en las elecciones (la izquierda lombardista).

Los partidos de izquierda no empezaron a reflexionar seriamente sobre el tema de la democracia sino hasta 1968, de tal manera que no estaban suficientemente preparados para la alternativa electoral al enfrentarse a ésta por una decisión del poder: la "reforma política" de 1977. Cuando el propio gobierno federal, que en 1949 había marginado al PCM de los procesos electorales, le regresó el registro en 1978, la preocupación por la democracia se acentuó en diversos grupos, ante todo por su debilidad electoral. Cualquier análisis de la realidad nacional no pudo dejar de situarse, sin embargo, en el contexto internacional de los años setenta, y tanto la cancelación de la opción de la lucha armada por muchas organizaciones de izquierda latinoamericanas, como el fenómeno del eurocomunismo, que implicó el abandono de las tesis de la revolución por un número significativo de partidos comunistas en Europa, fueron sin duda acontecimientos que tuvieron una influencia en este viraje. Las resistencias a la democracia continuaron siendo sin embargo muchas dentro de la izquierda, tanto de la corriente revolucionaria como del sector neolombardista, que en particular después de la nacionalización de la banca de 1982 siguió hablando de una alianza con los gobiernos priístas a fin de impulsar supuestas reformas desde el poder. Este proceso se acentuó a pesar de todo en 1982, porque resultó entonces claro para amplios sectores que los problemas nacionales y en particular la crisis no tenían su origen únicamente en razones externas como se pretendía, sino ante todo en los mecanismos del poder priísta: en la propia lógica antidemocrática del "sistema", caracterizada por la corrupción y el autoritarismo.

El hecho de que fuerzas importantes de la izquierda, alejándose unas de su vocación revolucionaria y otras de su proclividad priísta, defiendan a la democracia como una norma fundamental de convivencia y un medio insustituible para evitar excesos del poder constituye sin duda un viraje histórico de trascendencia para el futuro del país. Un signo desde luego de modernidad, de la única modernidad posible: la que rechaza todo autoritarismo.

Adolfo Gilly

La crisis coloca a todos los trabajadores, y en especial a los asalariados, a la defensiva frente al capital: éste es el rasgo más general de este periodo de reestructuración del capitalismo a través de la crisis abierto a la mitad de los años setenta en todo el mundo y al inicio de los ochenta (con el retraso debido al "paliativo" del auge petrolero) en México. A la defensiva significa también en el debate y el combate de las ideas, de las visiones de la época y del futuro, y de los proyectos de sociedad.

El abandono de la idea de revolución por parte de sectores importantes de intelectuales y corrientes de izquierda proviene de que, al no aparecérselos inminente, esa revolución escapa de su horizonte intelectual, que suele ser informado, erudito o culto (tres cosas diferentes) pero no de amplio radio. Colocadas las fuerzas del trabajo a la defensiva sus "intelectuales no tan orgánicos" cambian de ideas. De otro modo, no veo por qué contraponer la revolución —el acontecimiento social definitorio de los tiempos modernos si la idea de modernidad despuntó en Holanda y en Inglaterra en los siglos XVI y XVII Y si, como creo, el Zenón de *L 'Oeuvre au Noir*, de Marguerite Yourcenar, es el paradigma del hombre moderno— a la democracia política, cuando por definición y por aspiración todo movimiento revolucionario se propone ampliar las fronteras de la participación política para todos y permitirles decidir por sí mismos sus propios destinos — es decir—, conquistar la democracia.

En cuanto a las reformas democráticas en las sociedades modernas —las capitalistas y las postcapitalistas—, una vez más hay que recordar que en el marxismo clásico no hay contraposición entre reforma y revolución, sino oposición a la idea de que la reforma es el único camino y el horizonte último de la lucha por una reorganización socialista de la sociedad. No ha habido revolución, es decir, cambio radical, que no haya sido preparada por la lucha por reformas democráticas; y no hay país, empezando por los de Europa occidental, donde el voto universal, directo y secreto no haya sido el resultado de largos esfuerzos, campañas y enfrentamientos conducidos por los trabajadores, los oprimidos y los marginados contra los dueños del poder y de la riqueza, y no una concesión iluminada de los demócratas. Pues como es bien sabido, para estos personajes la democracia consiste, sencillamente, en el gobierno de los democráticos.

Roger Bartra

No me gusta separar las preocupaciones por la revolución de la temática de las reformas democráticas. Creo que los espacios y los movimientos que se orientan hacia la revolución sólo podrán realmente ser revolucionarios si son capaces de aceptar que la democracia política es un ingrediente indispensable de los cambios. No se trata, a mi parecer, de que el autobús socialista haya dado un viraje para abandonar la temática revolucionaria con objeto de avanzar por la carretera del reformismo. De hecho, las experiencias ligadas a la idea de *revolución* son las que han ocasionado que una gran parte de la izquierda mexicana reflexione sobre la democracia

política. Estas experiencias son de dos órdenes: aquellas ligadas a la *revolución* en Centroamérica, y las que se vinculan a la crisis del nacionalismo *revolucionario* en México.

La revolución sandinista y las luchas en El Salvador y en Guatemala han contribuido a replantear la temática de la democracia. A partir de la experiencia centroamericana podemos constatar que el socialismo es mucho más que una guerra contra el imperialismo, las dictaduras, el atraso, la miseria y el analfabetismo; podemos constatar que el cambio verdaderamente radical es inseparable de una alternativa democrática. Desde nuestro país es evidente —no necesitamos a Vargas Llosa para percatarnos de ello— que la revolución sandinista podría seguir una "vía mexicana": es decir, derivar hacia la institucionalización no democrática de la revolución. Ello implica, sea que el socialismo no acabe nunca de llegar o bien que llegue en su versión dictatorial y antidemocrática. Nuestra solidaridad con los revolucionarios centroamericanos no nos debe cerrar los ojos: a pocos pasos de nuestra frontera sur podría estarse cocinando una forma de "socialismo real" como ocurre a varios miles de kilómetros de distancia, del otro lado del mar. Pero también podría gestarse una: salida democrática hacia el socialismo.

Por otra parte, en México conocemos muy bien esa fórmula revolucionaria que es el antídoto de cualquier cambio democrático. En nombre de la revolución se aplastan, todos los días, las posibles reformas democráticas. Hemos llegado a una situación paradójica en la que es más subversivo ser reformista que ser revolucionario. Cuando se pide que no haya más presos y desaparecidos políticos -lo que no sería más que un pequeño rasguño reformista al sistema global de dominación- la clase dominante se alarma, y demanda "cambios estructurales". Cuando los estudiantes universitarios hacen una huelga para que se reformen unos reglamentos autoritarios, no faltan los patrioterros que los acusan de reaccionarios y que demandan no una reforma sino una "revolución" universitaria.

2

¿Cuáles son, a su juicio, las necesidades históricas, sociales y políticas que se expresan hoy en la demanda de democracia política?

Roger Bartra

La demanda —diría el clamor— creciente que exige una democracia representativa está en relación directa con la profundidad y la extensión de la crisis política. En 1982 hubo en México una aguda crisis política que mostró descarnadamente cuán estropeado se encontraba ya el aparato de gobierno. Fue muy revelador el hecho de que la aplicación de la "democracia social" (la nacionalización de la banca) haya sido hecha bajo una forma terriblemente autoritaria. La democracia social fue vista como un atentado contra la democracia política: el sistema mexicano, tal como funciona hoy, es incapaz de armonizar -siquiera levemente- las dos formas de

democracia. En el seno del gobierno parece que la opción se reduce a la siguiente polaridad: populismo autoritario o democracia conservadora. Pero como no se soluciona esta contradicción, lo que predomina es el tecnocratismo reforzado por una tímida vocación autoritaria y conservadora. Ésta es la razón del malestar de muchos priístas que miran, unos, hacia el PAN y, otros, hacia la izquierda.

Así pues, la democracia es en primer término una necesidad del sistema político; la forma priísta de gobierno autoritario ya no es operativa ni eficiente para la clase dominante y cada vez es menos capaz de cumplir una función mediadora ante las clases populares. El telón de fondo de esta situación es, por supuesto, la profunda crisis económica que vive el país. Ella ha exacerbado las tensiones: ha incrementado los apetitos de los empresarios y ha apretado los cinturones de los trabajadores. No quiero decir que es la situación económica la que determina la necesidad de democracia; me temo, incluso, que la crisis económica haya retrasado las necesarias reformas democráticas; pero es evidente que la crisis económica ha condicionado el comportamiento de los diversos sectores sociales: aunque ha generado irritación y desconfianza, también ha auspiciado la desorganización y la desmovilización; aunque ha generalizado el descontento, ha abierto también las puertas del miedo y ha fomentado el individualismo y la atomización de la sociedad civil.

Luis Javier Garrido

El hecho de que tras siete décadas de régimen de partido de Estado se multipliquen en México una serie de demandas de democracia, expresa ante todo la necesidad histórica de que el país viva en un régimen de derecho. La lucha por alcanzar la democracia política se da no sólo como un rechazo a las ineficiencias y los atropellos de los gobiernos surgidos del PRI, sino como una voluntad de contar con un gobierno que funcione bajo normas legales, y no al arbitrio de una burocracia que funda el ejercicio de su poder en una interpretación abusiva de las leyes. La demanda de democracia política se presenta como una aspiración histórica no culminada en la vida independiente del país, y a la que México llega tarde en relación a otros pueblos descolonizados. El país ha vivido no sólo bajo un "sistema" de gobierno centralista y autoritario, que subordinó a su autoridad los otros dos poderes, los gobiernos locales y municipales y amplios sectores de la sociedad, sino que no se propuso instaurar un estado de derecho.

La antidemocracia del régimen se tradujo lo mismo en los fraudes electorales que en una vida social marcada por reglas y prácticas autoritarias. La lucha por la democracia debe por consiguiente entenderse en su sentido más amplio, no únicamente como una búsqueda de la democracia política, sino también de la libertad sindical, y de los derechos a la información, a la educación, a la cultura, a la salud y a la vivienda: como la aspiración a un sistema de vida en el cual todos los mexicanos tengan las mismas posibilidades.

Es indudable que sectores cada vez más amplios de la población no aceptan ya ser simples

objetos de la política priísta y están decidiendo participar como actores en la vida pública nacional, lo que implica ante todo un rechazo a los mecanismos de control sindical y de fraude electoral que sustentan al "sistema" mexicano, y que han relegado a la población ciudadana a una condición pasiva e inferior en materia de elecciones. La participación política se limitó en México en los últimos decenios a plebiscitar decisiones previamente tomadas en la cúpula del Estado, es decir por el Presidente de la República, por lo que las elecciones no constituyeron sino un mecanismo legitimador de una política cada vez más antipopular. La demanda de democracia política entraña también por consiguiente un cuestionamiento de la cultura política priísta, con todos sus mecanismos de "dedazo", manipulación y acarreo, que han caracterizado a la vida pública del país.

En las crecientes exigencias por que se instauren en el país normas de convivencia democráticas, el aspecto de la política es sin lugar a dudas el más importante. Amplios sectores del pueblo mexicano saben que se les hizo abdicar durante más de medio siglo de derechos fundamentales, y entre ellos el de elegir a sus gobernantes. Al participar en la vida político electoral, no desean por consiguiente sino reasumir tales derechos y responsabilidades constitucionales: los que implican la posibilidad de impulsar muchos otros cambios fundamentales.

Rubén Jiménez Ricárdez

La demanda de democracia política posee una legitimidad incuestionable. Aunque sólo fuera porque a lo largo de nuestra historia ha sido escamoteada o pervertida por las clases dominantes. La, revolución, recordémoslo, tuvo su origen político inmediato en la exigencia no satisfecha de democracia electoral. Pero resultó en la instauración de un Estado que logró expropiar de poder a la mayoría de la población. Copó a las organizaciones de la sociedad civil —obreras, campesinas, de los sectores medios e incluso empresariales— y las transformó en una especie de prolongaciones suyas. A las masas urbanas y rurales las forzó a incorporarse, a través de sus organizaciones, al partido del Estado (PNR-PRM-PRI), un desdoblamiento hipertrofiado del propio Estado y una de las piezas clave del sistema. En la otra pieza maestra, en la figura presidencial, se concentra no sólo el poder del Estado y del gobierno sino también el poder expropiado a la sociedad. Los otros poderes constitucionales —el Legislativo y el Judicial— son subsidiarios del Ejecutivo y cuentan sólo con limitadísimos espacios de acción autónoma. Se creó así un Estado fuerte, con una clara vocación, apenas refrenada, a ejercer un monopolio de la política; pero también con un punto débil: su extrema rigidez.

Esa forma de Estado sólo puede subsistir mediante el fomento y la conservación de formas no democráticas de relación política. De allí la antidemocracia que impera en las organizaciones obreras y campesinas; el disimulo y la autocensura de la prensa y de los otros medios de comunicación masivos; el persistente recurso al fraude electoral; el tapadismo como acto supremo para la transmisión del mando; la degradación de las ideas y de las palabras, convertidas en instrumentos de manipulación; los monstruosos niveles de corrupción pública. El partido del

Estado (cuya membrecía, según cálculos, equivale a la quinta parte de la población) todavía no pierde —desde que se fundó en 1929— una sola elección presidencial, ni de gobernador, ni de senador. La oposición sólo ha logrado un mínimo acceso a la Cámara de Diputados. Datos reunidos por Octavio Rodríguez Araujo muestran lo siguiente: desde 1946 hasta la actual legislatura (que concluye en 1988) el PRI obtuvo el 83.13% de los diputados (es decir: 2710) y la oposición el 16.87% (es decir: 550). De esta última cifra, el PAN sólo ha ganado, por mayoría relativa, 51 diputados; la izquierda, ninguno por ese método; 300 han llegado a la Cámara por representación proporcional, o sea, desde que existe la reforma política.

Es natural que un régimen tan cerrado genere la lucha por la democracia. Limitada a su aspecto electoral, la actualizó la reforma de 1977, que abrió cauce a la participación institucional de corrientes antes proscritas y promovió con ello esperanzas de transformación a fin de cuentas infundadas. El grupo dominante creó todos los seguros legales necesarios para mantener a los opositores en condición de minoría y conservó los resortes centrales en sus manos a través de su holgado dominio de la Comisión Federal Electoral; sin contar con que continúa ejerciendo el fraude o incluso usa al ejército y a la policía, como en el caso de Juchitán. A la lucha por la democracia la actualizó, también, la pugna que escenifican distintos grupos capitalistas, y que cobró mayor impulso a raíz de la expropiación bancaria de 1982; dicha pugna se encuentra en el origen (aunque no es la causa única) del fortalecimiento electoral del PAN. Contribuyó, asimismo, un cierto ambiente de ideas, las cuales, desafortunadamente, en sus expresiones más difundidas, tienden a confundir la democracia electoral con la democracia política. Esta última, digámoslo de pasada, implicaría la democratización plena de las relaciones de poder en el país, comenzando por la liberación de las organizaciones sociales bajo control priísta.

Pero el gran impulso para la lucha actual por la democracia lo propaga la propia lucha del pueblo. Surgió del Movimiento de 68 y, una y otra vez, aparece y reaparece en las luchas de los sectores que se movilizan. Sin embargo, ¿cabe esperar, dentro de los límites del régimen político mexicano, el progresivo avance de un proceso de modificaciones legales que, con orden y sin convulsiones, instaure la democracia —o aun menos: la democracia electoral—? Soy escéptico al respecto, porque este régimen, al negar la democracia, busca asegurar su sobrevivencia.

Carlos Pereyra

La demanda de democracia política expresa un conjunto de necesidades suscitadas por la aparición de la sociedad de masas, es decir, por la aparición de un tipo de organización social donde irrumpen en la escena política todos los estratos de la población. Si la opinión pública fue, antes del surgimiento del movimiento obrero y de la corriente socialista una institución limitada a las capas ilustradas de la población, conformadas apenas por el núcleo de los propietarios, con el desarrollo del capitalismo se asiste a la expansión de la opinión pública al conjunto de la sociedad. Se plantea por primera vez, entonces, la idea del sufragio universal y la constitución de partidos y corrientes ideológicas donde todos los individuos intervienen de una u otra manera.

Queda rota para siempre la homogeneidad social propia de un régimen político restringido al núcleo de los propietarios. Es inherente a la sociedad de masas la pluralidad de intereses, aspiraciones y proyectos sociales. Ningún partido puede pretender en la sociedad de masas centralizar y encarnar la voluntad colectiva, por lo que sólo hay lugar para la dominación autoritaria que anula las diferencias y, en definitiva, agota y esteriliza la multiplicidad y riqueza de la sociedad de masas, o para el funcionamiento de la democracia política, único mecanismo capaz de garantizar la productividad social y cultural de una sociedad de suyo heterogénea.

Las clases sociales no son por sí mismas sujeto político, no producen en cuanto tales ideas y formas de organización, pues éstas son resultado de la actividad orgánica de agrupamientos políticos e ideológicos cuya existencia es inhibida por la ausencia de democracia política. Ningún proyecto político convertido en gobierno puede recoger la diversidad de intereses sociales, dada la densidad y complejidad de éstos, por lo que sólo el marco de la disputa democrática hace posible el tratamiento productivo de los conflictos. La demanda de democracia política expresa la necesidad histórica de encontrar fórmulas de asumir el conflicto y la disputa política, en vez de apostar a una ilusoria supresión de ambos.

Adolfo Gilly

La necesidad creciente, a medida que se extiende la sociedad moderna (y con ella, disolviendo las antiguas dependencias y fidelidades de la sociedad tradicional, la red de intercambios mercantiles, personales, culturales y científicos que la definen), de la participación de todos en el gobierno de sus propias vidas individuales y colectivas. Democracia política significa y requiere información, autorganización, libertades y, al extremo, crecimiento de las relaciones de solidaridad entre iguales que vayan minando las viejas relaciones de dominación / subordinación.

3

¿Cuál es, a su juicio, la relación entre la ampliación de la democracia política, particularmente en sus expresiones electorales, y las posibilidades de una vida social democrática que correspondan a la constitución de las organizaciones sociales y a su acción en el campo de las relaciones de poder?

Adolfo Gilly

Cada sociedad está dominada por una trama de poder específico, que corresponde a las relaciones sociales dominantes en ella. En la sociedad capitalista, el núcleo central de la relación de dominación/subordinación propia de esta sociedad está en la relación salarial y su corolario, el despotismo industrial en los lugares de trabajo. Esto no anula la subsistencia y prolongación en extensión y profundidad de otras relaciones de dominación/subordinación más antiguas y también

más persistentes en la historia: hombre/mujer, adulto/niño, adulto/anciano, cacique/cliente, nación/nación, y así sucesivamente. Sólo quiere decir que en la medida en que la relación salarial se extiende en la sociedad moderna capitalista y postcapitalista (y esta extensión no la negará hoy ni el más encarnizado sostenedor de la "desaparición del proletariado"), dicha relación es el fulcro sobre el cual se insertan y articulan todas las otras, porque en torno a ella gira la forma específica de extracción del producto excedente.

Debe decirse que si un rasgo sintetiza las transformaciones que está sufriendo México en los años que corren desde mitad de los setentas cuando menos, es la ampliación constante en extensión y profundidad de las relaciones salariales; en otras palabras, el crecimiento del número de trabajadores asalariados, directos e indirectos, ocupados o semiocupados, a expensas de las demás categorías. Si esto es así, atacar primero y subvertir después las relaciones de poder en el capitalismo quiere decir atacar e incidir en ese núcleo determinante y, para ello, organizar las fuerzas para hacerlo. En esto, y no en una misión histórica supuestamente fijada por Marx o sus seguidores, reside la centralidad de los asalariados en la subversión de las relaciones de dominación en nuestra época. Esa centralidad se mide, por eso, epocalmente, y no a la escala de los años, las coyunturas o los humores de cada vida individual.

Pero ninguna de estas conocidas ideas se contraponen a la de democracia electoral en México. Al contrario, la existencia de un país que no vota -y este país que no vota es mayoritario al menos desde Benito Juárez- no deslegitima al actual sistema. Éste se legitima, más allá del voto y al margen de él, por los mecanismos corporativos y las fidelidades personales o colectivas basadas en la gestión, la absorción, la exclusión o la inclusión en las concesiones y favores desde arriba, en la organización para presionar a ese poder y en la combinación de concesiones y represiones que teje la red de relaciones realmente existente entre gobernantes y gobernados. El no voto, la abstención, no daña al sistema, más bien lo prolonga en el tiempo, mientras que la extensión del voto tenderá a disolverlo en su forma actual. Por eso la izquierda tiene que estar interesada en el voto aunque, dicho esto, el sistema haya encontrado en México los medios para incluir a todos en la negociación de algo que, por definición, sólo se puede contar y no negociar: el voto mismo.

Carlos Pereyra

Hay relación directa entre democracia política (formal o representativa) y las posibilidades de una vida social democrática. En efecto, no es concebible la ampliación de la democracia política sin que a mediano plazo ello repercuta en la estructura de las propias organizaciones sociales, es decir, es inconcebible la consolidación del juego democrático en la elección de gobernantes (en la *sociedad política*) y el mantenimiento de una estructura vertical y antidemocrática en las instituciones de la *sociedad civil*. Por el contrario, la existencia de organizaciones obreras y campesinas con escasa significación en el campo de las relaciones de poder, más comprometidas con la burocracia gobernante que con las demandas e iniciativas de sus agremiados, encuentra una de sus condiciones de posibilidad en la insuficiente democracia política del país. La

burocracia sindical cetemista ha registrado con precisión esta circunstancia y se opone de manera sistemática a todo intento gubernamental de abrir paso a las exigencias de ampliación de la democracia política. Se opuso a la reforma legislativa de 1977 y en 1986 a la modificación del estatuto político del Distrito Federal. En la medida en que la cuestión democrática es también un asunto cultural, la burocracia cetemista es renuente a cualquier paso que fortalezca la cultura democrática de la sociedad.

Mientras menos amplia es la democracia política, más fácil resulta para el gobierno adoptar decisiones públicas contrarias a los intereses de las organizaciones sociales de las clases dominadas. Si el capitalismo supone por definición la transferencia de recursos en beneficio de los dueños del capital, el tamaño de esa transferencia no está determinado de manera exclusiva por factores económicos, sino por el peso relativo de las organizaciones sociales en el campo de las relaciones de poder. Este peso relativo tiene variaciones significativas en función de la mayor o menor solidez de la democracia política.

La calidad de *ciudadano*, es decir, la participación de los miembros de la sociedad en la formación de la voluntad colectiva, se desdobra en dos dimensiones básicas: ciudadanía política y ciudadanía social. Mediante la democracia política y, en particular, a través de sus expresiones electorales, es decir, con el ejercicio del derecho de voto y la militancia en partidos políticos, se concreta la primera de las modalidades señaladas. Condición necesaria para una vida social democrática es el funcionamiento real de una vida política democrática, pero esto no es condición suficiente. Se vuelve imprescindible la existencia también de organizaciones sociales democráticas a través de las cuales los individuos intervengan en la formación de esa voluntad colectiva, no ya en su calidad genérica de miembros de la sociedad, sino con base en sus intereses particulares dados por la función social que desempeñan. No se trata, claro está, de formas excluyentes de ciudadanía, sino de formas complementarias. Toda vez que, más allá del poder político condensado en el gobierno del Estado, en la sociedad operan numerosos otros centros de poder, y por ello se puede hablar de un campo de relaciones de poder, junto a la democracia política es preciso el despliegue de la democracia social. Carece de sentido luchar por una forma de ciudadanía en detrimento de la otra, aunque sin duda hay condiciones históricas que imponen determinada prioridad.

Rubén Jiménez Ricárdez

Plantear la relación a la inversa es más correcto. Porque la estrechísima apertura electoral del régimen fue diseñada para evitar que influyera en las organizaciones sociales sometidas al PRI. Una parte de la izquierda, quizá con el fin de burlar esa limitación, ha creído, sin embargo, que con astucia, con declaraciones, con artículos, podía obligar a los charros a concertar una alianza o frente único; aparte de que se realizaría mediante una negociación de cúpula y debía desembocar en el fortalecimiento del Congreso del Trabajo (sector obrero del PRI), esa izquierda sólo consiguió oscurecer su propio perfil y diseminar más confusión.

En la última década pueden observarse dos procesos, casi paralelos, casi sin relación entre sí. Por un lado, un sector de la izquierda se vuelca empeñosamente a trabajos electorales de los que sólo obtiene magros resultados, que políticamente no cambian nada significativo. Por otro, cientos de miles de mexicanos —a la defensiva, en luchas sectoriales, regionales o locales, sin poder consolidar una coordinación estable que al confluir en un solo torrente les permitiera asestar golpes más fuertes— pelean sin tregua. Su lucha tiene lugar en niveles básicos: en los sindicatos, en los centros de trabajo, en los ejidos y comunidades, en los municipios, en las colonias y barrios populares, en las escuelas. Se topan siempre con el poder. Con mayor frecuencia, grupos, delegaciones, huelguistas de hambre, contingentes numerosos, desde todos los rumbos del país llegan a manifestar su descontento y su protesta hasta el núcleo simbólico del poder: el Zócalo de la Capital. En la mayoría de los casos, efecto de la cerrazón y el autoritarismo, las demandas democráticas se sobreponen a las demandas concretas. De todas las tendencias que hoy actúan cambiando la trama de la sociedad mexicana, debería ser fundamental para la izquierda esa transformación gradual e irrevocable que se procesa en el estado de ánimo de las masas populares. Con instinto certero, los mexicanos que protagonizan esas luchas apuntan al corazón del régimen: desorganizar y destruir la dominación del PRI en los espacios básicos, construir la democracia desde abajo mediante la participación multitudinaria, es la única garantía, el único camino realista, para implantar la democracia en México. Por eso resulta criticable el abandono de la militancia de base; no la actividad electoral, sino el hecho de que se vuelva prioritaria y casi exclusiva.

Luis Javier Garrido

La democracia no puede entenderse sino como un proceso creciente de participación de la población ciudadana en las decisiones políticas: no solamente en aquellas que sus representantes toman dentro del marco jurídico como actos de gobierno, lo mismo administrativos que legislativos, sino en todos los ámbitos de la vida cotidiana.

La ampliación de la democracia implica por lo tanto lo mismo el que se cumplan las leyes en materia político-electoral, que el buscar que se extiendan las posibilidades participativas a través de otros medios, incluyendo las reformas legislativas u otros mecanismos poco o nada ensayados en la historia mexicana. La lucha por hacer vigente el orden legal es sin embargo clave en el proceso de búsqueda de la democracia, e implica desde luego: a] el que se establezca un régimen competitivo de partidos políticos, para lo cual deben cesar tanto las prerrogativas ilegales para el PRI como la afiliación coercitiva a éste de centrales y sindicatos; y b] el que terminen las presiones y las manipulaciones ilegales en las elecciones, a fin de que éstas sean realmente elecciones.

El simple hecho de establecerse la democracia política, que no existe a nivel federal ni local, ni en el texto de las leyes ni en las prácticas, sería indudablemente el factor que aceleraría una serie

de cambios, muchos de ellos acaso impredecibles. La cultura política de los mexicanos se ampliaría, pues el PRI tendría que transformarse en un partido político al mismo título que los demás, y las posibilidades de democratizar la justicia, los medios de comunicación y la educación serían reales ya que la acción del gobierno sería determinada por las mayorías: la sociedad civil se fortalecería. La democracia política implicaría desde luego un estado de derecho y otra política económica y social para México.

Roger Bartra

Una verdadera ampliación de la democracia política debería manifestarse —es la señal inequívoca— en la posibilidad real de que las corrientes minoritarias se conviertan en mayoritarias. No quiero decir con esto que la única prueba definitiva sería que Rosario Ibarra ganase la presidencia en las elecciones de 1988. La posibilidad real de que una minoría se convierta en mayoría no viene dada únicamente por los mecanismos electorales, sino también por la expansión de una sociedad civil democrática. Es preciso, pues, que cambien radicalmente las relaciones de poder que tiñen de autoritarismo la vida social mexicana. Mientras los canales de comunicación entre la vida civil y la política estén reducidas al cacique rural, al cura, al caudillo sindical o al gestor influyente será difícil pensar que la sociedad civil pueda ser el caldo de cultivo de alternativas políticas nuevas. Los mecanismos mediadores corporativos han anquilosado nuestra vida civil y han provocado una auténtica esclerosis de los vasos comunicantes entre la sociedad y el Estado. Uno de los factores que más han contribuido a cerrar los poros de la cada vez más dura epidermis del gobierno mexicano es la corrupción. Aunque la función sociopolítica de la corrupción es precisamente la de "aceitar" y "acelerar" los mecanismos burocrático-políticos que de otra manera permanecerían inmóviles, bloqueando intereses particulares surgidos en la sociedad civil, es preciso notar que el ejercicio cotidiano de la corrupción acaba saturando de inmundicias y detritus los vasos comunicantes del sistema. Hoy en día es tan grande la cantidad de mierda acumulada, que el aparato político ya no es capaz de procesarla eficientemente.

4

Entre la democracia por delegación o representativa, que se ejerce principalmente por vía de los procesos electorales, y la democracia directa, que significa 'un creciente control popular sobre las condiciones de vida y trabajo, ¿cómo caracteriza usted la práctica de la izquierda mexicana en referencia a la distinción clásica?

Luis Javier Garrido

La división entre democracia por delegación o representativa y democracia directa es muy útil desde el punto de vista teórico para analizar el problema; lo es menos si se trata de discutir la

cuestión democrática en México. En un país en donde la democracia representativa no ha existido sino muy precariamente, limitarse a hablar de la democracia directa sería ignorar el aspecto fundamental del problema. Es cierto que en las discusiones sobre la democracia se proponen a menudo temas como "la democracia directa", "la revocación del mandato", "la autogestión" o "la era de la informática en la democracia". Esos debates no consideran sin embargo que México ha sido en la letra de la ley una República representativa, democrática y federal, pero que en la práctica ha tenido un régimen no representativo, poco republicano, antidemocrático y centralista; esto es, que la representatividad democrática no la hemos conocido sino de manera incipiente, y que es necesario luchar por alcanzarla para, a partir de ella, profundizar en la vía democrática.

Un régimen fincado en la vieja democracia representativa no sería desde luego sino una primera etapa de un largo proceso por la democratización del país; pero constituye una etapa imprescindible. Este proceso debería culminar sin duda en una democratización amplia de la vida social y de las condiciones de trabajo, pero tal aspecto de la participación política no es concebible sin aquél. La democracia representativa con todas sus limitaciones y sus defectos, puede ser una vía fundamental para impulsar una transformación profunda de la sociedad y constituye una primera meta a alcanzar que no puede ser desdeñada al plantearse otras formas válidas de democracia. Los mecanismos de la también vieja democracia directa, que en la teoría marxista aparecen como un ideal de democracia, no son sin duda ajenos a nuestra tradición política y deberán desde luego a contribuir algún día a que la sociedad mexicana sea mas igualitaria.

Las prácticas de la izquierda mexicana, tanto en relación a la democracia representativa o por delegación como en lo que respecta a la democracia directa, han sido en todo caso insuficientes. Los partidos políticos en general, y los de la izquierda no han sido la excepción, no se han planteado suficientemente el problema de la democracia: no en el seno de los mismos, ni en lo relativo al proyecto de sociedad que proponen. La representatividad democrática ha empezado a ser una preocupación de los dirigentes de izquierda, y algunos movimientos sociales, como el Movimiento Estudiantil de 1968, adoptaron en su lucha algunos de los mecanismos de la democracia directa, pero aun así múltiples aspectos de la cultura de la antidemocracia de la sociedad mexicana se han anclado también en los partidos de izquierda: como el autoritarismo, el dogmatismo y la intransigencia.

Adolfo Gilly

No veo oposición sino complementariedad entre ambas formas de democracia, y esta idea se remonta al menos a Rosa Luxemburgo. En cuanto a la práctica de la izquierda mexicana a este respecto, creo que en su mayoría no se ha liberado de un vicio de origen: no ha hecho todavía, en sus propias ideas, convicciones y prácticas, la crítica a fondo de los regímenes del socialismo real. Esa mayoría guarda una complicidad abierta o vergonzante con la falta de democracia de los trabajadores en la totalidad de dichos países -y no incluyo entre ellos a Nicaragua-, que es el

verdadero escándalo que impide el desarrollo de relaciones sociales que conduzcan al socialismo. También la guarda con respecto a la existencia histórica, no coyuntural, de una capa o clase social estabilizada, la burocracia gobernante de esos países, que monopoliza el poder (y las decisiones de asignación y distribución del producto social excedente), maneja la información, niega los derechos de organización independiente del Estado, de palabra, de prensa, y falsifica las elecciones, cuando las hace. Una izquierda que no hace la crítica de esa realidad, no puede ser creída. Hasta el momento, son los trabajadores polacos organizados en Solidaridad quienes han ido más lejos y más a fondo en esa crítica práctica, cualesquiera fueran sus diversas corrientes de ideas. Una izquierda contraria, ambigua o indecisa con relación a este punto de definición crucial de las revoluciones socialistas, no puede hablar de su vocación democrática en su propio país, del mismo modo como una izquierda que no defendiera a Nicaragua no podría hablar de su vocación liberadora.

Roger Bartra

La izquierda mexicana, tradicionalmente, se ha movido con soltura en la democracia directa y con dificultad en la democracia representativa. Esto ha provocado que exista muy poca reflexión sobre el vínculo entre ambos procesos democráticos. La idea general que suele predominar es que cuanto más directa sea la democracia, mejor será para los intereses populares. Esta idea no resiste la prueba de la experiencia, pero el hecho de que la izquierda haya sido acorralada durante decenios a actuar casi exclusivamente en las pocas instancias de democracia directa que existen en México, ha provocado una gran desconfianza en los procesos de decisión que no pasan por una asamblea.

Es necesario reconocer los límites de la democracia directa. Ella es indispensable en los procesos de autogestión de la producción industrial, por ejemplo. En cambio, la democracia directa en el sistema judicial es una posibilidad, para decir lo menos, nefasta. Para llevarlo al extremo: es completamente diferente un comité de control obrero en la fábrica que un comité de linchamiento. Una cosa es una asamblea de estudiantes y otra cosa de un orden muy distinto es un tribunal popular: la simpatía que nos despierta la primera no debe ocultar los peligros de una justicia sometida al delirio de una minoría constituida en poder directo. Éste es precisamente el problema de la democracia directa: visto desde una perspectiva global, se trata de minorías que ejercen el poder directo, pues toda asamblea es la agrupación de un pequeño sector de la población. Cuando el "control popular" de las asambleas rebasa con sus decisiones los límites de sus condiciones de vida y trabajo, para determinar las condiciones de vida y trabajo de otros sectores de la sociedad, entonces surgen las dificultades. Por otro lado, una estructura piramidada de asambleas, ligadas por mecanismos de delegación por mandato, hasta llegar a una superasamblea en la cúspide, es un sistema político que oscila entre la ineficiencia y el despotismo.

La democracia representativa y la democracia directa tienen límites que si son traspasados suelen

engendrar formas de autoritarismo. En México el movimiento estudiantil que organizó en 1987 la huelga por un congreso universitario, nos ha proporcionado un ejemplo de las virtudes y de los límites de la democracia directa: la organización del congreso universitario, que introducirá los mecanismos de tipo representativo, muestra ya los problemas de este tipo de democracia. Sin embargo, estas experiencias no se pueden tener todavía a escala nacional, debido a la ausencia de una estructura democrática en el sistema político mexicano.

Carlos Pereyra

La democracia directa no es opción alternativa frente a la democracia representativa. La distinción clásica descansa en una reflexión muy insuficiente sobre el papel de la política en las sociedades contemporáneas. Ya en Rousseau, quien tal vez elabora por primera ocasión de manera sistemática la idea de la democracia directa, queda claro que su viabilidad depende de formas de organización social impensables en el mundo de nuestros días: pequeñas comunidades de productores autónomos. No hay duda de que falta un enorme camino por recorrer en el establecimiento de un creciente control popular sobre las condiciones de vida y trabajo. Esta tarea forma parte del programa de la democracia social, pero en ningún caso los avances en la democracia directa, así entendida, eliminan la necesidad de pugnar por una sólida democracia política (formal y representativa). Las cuestiones puntuales, locales e inmediatas que están en juego en los mecanismos de la democracia social directa, pertenecen a un orden de problemas que no incluye, ni puede incluir, cuestiones sustantivas sobre el funcionamiento global de la sociedad y el Estado. Este segundo tipo de cuestiones son competencia exclusiva de los órganos de gobierno, cuyo funcionamiento democrático jamás puede ser garantizado a través de la injerencia, por vigorosa que sea, de las masas sobre sus condiciones de vida y trabajo. Para ello se requiere la participación de la sociedad en el gobierno mediante las instituciones de la democracia representativa. No se puede disolver el *momento universal* del Estado en las preocupaciones particulares de los organismos sociales específicos. Así, por ejemplo, la lucha por la democracia en sindicatos y organizaciones campesinas, por un control progresivo de la población sobre las condiciones de trabajo y habitación, por la vigilancia creciente del funcionamiento de las instituciones educativas y de salud, de los medios de comunicación y organismos culturales, etcétera, no está reñida ni excluye la preocupación por el modo como se administra el rumbo general de la nación. No tiene por qué plantearse un falso dilema entre democracia política y democracia social.

Rubén Jiménez Ricárdez

La práctica de la izquierda en torno a esa distinción es poco significativa: la mayor parte de ella se concentra en la cuestión electoral.

¿Piensa usted que la demanda de democracia política sea hoy una necesidad sentida por los grupos mayoritarios del país?

Rubén Jiménez Ricárdez

La mayoría de los mexicanos, como es obvio, no se han movilizadO hasta ahora en pos de la democracia política. Pero se trata de un objetivo estratégico. Por él pelean grupos crecientes del pueblo. ¿Qué lo volvió apremiante? El lento proceso de destrucción de la alianza social que, bajo la dirección del Estado, selló la clase dominante con las clases dominadas en el periodo de gobierno de Cárdenas, y que fue refrendada durante y después de la segunda guerra mundial. Esa alianza --sellada gracias a la legitimidad de que revestía al régimen su origen revolucionario, actualizado en las grandes reformas cardenistas- dotó a la presidencia y al partido oficial del definido perfil que los distingue desde los años treinta. Su deterioro se encuentra en la base del deterioro que sufre la figura presidencial en los últimos tiempos y explica también el deterioro del PRI. No hay que buscarle otra causa a esos fenómenos: se localiza en la lenta pero irrevocable descomposición del pacto social sobre el cual ha reposado la larga estabilidad política de México. Dos hechos lo hirieron de muerte. Real y simbólicamente el 68 marca la línea divisoria: hasta allí alcanzó el impacto legitimador de la revolución. El Estado no pudo restañar la grieta política y moral que le causó el Movimiento, al que tuvo que derrotar militarmente; ni pudo tampoco restaurar la ideología de la revolución mexicana, maltrecha por el disenso de aquellas multitudes. A esa fisura histórica se sumarían poco después, para ensancharla, la crisis y sus secuelas en todas las esferas de la vida de México.

Desde 1982 nos encontramos en un periodo de definición. En ese año se evidenció, ya sin ambages, la crisis de la estrategia de reproducción capitalista sobre la cual se sostuvo la mencionada alianza. Las concesiones materiales a las masas —salario, subsidios al consumo, empleo, reparto agrario, atención a la salud, etcétera; mínimas, pero reales— las borró del mapa o las redujo a la insignificancia la política de austeridad. Pero con ello el régimen infringió uno de los términos del pacto: las concesiones materiales -y su fuerte carga ideológica legitimadora- eran la contraparte del consentimiento pasivo de la mayoría. A la presión de la crisis sobre el pacto social poscardenista, se añadió otra, que proviene también de la propia lógica del capital: la nueva estrategia de reproducción capitalista que lucha por imponerse —caracterizada por algunos autores como "concentradora y excluyente"- entraña la necesidad de profundas transformaciones estructurales y de concomitantes readecuaciones en el sistema político y en las formas de intervención del Estado en la economía. No se avizora, es cierto, un inminente derrumbe catastrófico, sino un lento proceso erosivo: como otros semejantes, éste del suelo social puede tardar mucho antes de que produzca una transfiguración. Pero aquí no se trata de fuerzas naturales actuando sobre la materia inerte. Para prevalecer, la nueva estrategia del capital debe cambiar de arriba a abajo sus relaciones con los trabajadores: requiere —entre otras cosas— redisciplinarlos, conseguir sustanciales incrementos en la productividad, someterlos a más duras condiciones de explotación, expulsar a millones del mercado de trabajo. ..Ésas son las fuerzas

que suscitan el aumento de las tensiones, la disposición a luchar, la acumulación de la inconformidad y de la ira populares. Aunque, por desgracia, el grupo hegemónico cuenta a su favor que el pueblo mexicano pelea hoy sin dirección, sin vanguardia.

La nueva estrategia del capital reclama también, por otra parte, una reorganización del bloque dominante y una readaptación del sistema político. De allí las luchas intercapitalistas, pero también las tensiones que han surgido en aparatos del Estado como el PRI y los sindicatos. Muchos de los usufructuarios de estos últimos, ante la lógica del capital, representan verdaderos estorbos. Uno de los más poderosos obstáculos a la plena implantación de la nueva estrategia lo constituye, en efecto, la actual configuración del sistema político. Así, por ejemplo, lo oneroso del aparato sindical charro, en gran medida sustentado en una planta industrial obsoleta, administrador de contratos colectivos que muchas veces sancionan relaciones de trabajo en declinación, se contradice con el imperativo de reafirmar la racionalidad capitalista. Como ese ejemplo, hay otros muchos. Por eso, un aspecto fundamental del combate por la "modernización de la economía" y la "reconversión industrial", se librará (se libra ya) en torno a la transformación del sistema político y la forma del Estado. Las luchas decisivas pertenecen al porvenir, pero se incuban ya en las tendencias del presente. Sería insensato suponer que el capital no puede realizar las adecuaciones que precisa para reanudar "normalmente" el proceso acumulativo: es difícil calcular a qué costo, pero sin duda puede ser mayor del que ya pagamos. Las actuales tendencias transformadoras del capitalismo no portan el progreso político y social: vienen acompañadas más bien de mayor autoritarismo y antidemocracia, de injusticias y sufrimientos para las mayorías. Todo indica, pues, que las tensiones que ya azotan al cuerpo social tenderán acrecer. Y que, con ellas, a la lucha por la democracia plena se agregarán capas cada vez más hondas y amplias del pueblo mexicano.

Adolfo Gilly

Sí. Pero esa demanda se expresa por diversos modos. Un ejemplo histórico: si la consigna "sufragio efectivo, no reelección" tuvo un eco tan profundo en un país que no votaba, no fue sólo por su significado explícito, sino por el contenido inmediato e implícito que le dieron millones de mexicanos en los municipios rurales: sacarse de encima al jefe político y al cacique despótico, reivindicar el gobierno municipal. En la lógica cotidiana de la vida política mexicana de movilización, presión, enfrentamiento y negociación entre gobernantes y gobernados se expresa también, a su modo, la demanda de "democracia política". Encontrará mañana expresiones más claras.

Carlos Pereyra

Aunque la demanda de democracia política se ha extendido de manera significativa en los últimos años, no se ha llegado al punto de que sea ya una necesidad sentida por los grupos mayoritarios del país. La razón básica para que esto no sea todavía así es que la demanda de

democracia política supone un alto nivel de politización y madurez ciudadana. En un país con bajo grado de escolaridad, elevados índices de analfabetismo funcional, insuficiente acceso a la información y a la cultura, débil arraigo de los partidos en la sociedad y, sobre todo, fuerte escepticismo respecto al sentido y eficacia de la actividad política organizada, la demanda de democracia política encuentra serios obstáculos para desplegarse. Cuando la mayoría de la población utiliza prácticamente toda su energía vital en la lucha por la sobrevivencia, el espacio posible para la actividad política queda muy restringido. En efecto, los niveles abrumadores de desigualdad social observables en nuestro país dificultan la visión de conjunto propia de la acción política. Los movimientos sociales son impulsados y encauzados más bien por reivindicaciones inmediatas. La perentoria urgencia de satisfacer necesidades elementales no es fácil de compatibilizar con objetivos políticos de alcance general. En el plano teórico abstracto es fácil señalar la conexión estrecha entre la democracia política y el establecimiento de mejores condiciones para luchar por la tierra, defender la propiedad comunal, lograr circunstancias más adecuadas para la negociación laboral y, en fin, para construir una organización económica y social con mayores perspectivas de imponer la atención a los intereses populares, pero en las luchas sociales concretas no es fácil advertir esa conexión porque, en verdad, las mediaciones que articulan economía y política, vida cotidiana y política, no son evidentes de suyo. Aunque la disputa política es la disputa de distintos proyectos de ordenamiento social y la democracia crea circunstancias más favorables para el desarrollo de proyectos alternativos opuestos al gubernamental, el enlace entre un proyecto de orden social dado y las demandas y reivindicaciones específicas de cada grupo social no es directo o automático. La izquierda ha tenido enormes dificultades para vincular su proyecto global de un nuevo orden social, esbozado todavía de manera muy borrosa, y las preocupaciones actuales de los diversos segmentos de la población.

Se trata, por lo demás, de una sociedad donde se ha impuesto una cultura apolítica, registrable no sólo en el elevado porcentaje de abstención electoral sino también en el reducidísimo número de personas afiliadas a partidos (registrados o no). Nunca se insistirá de manera suficiente en el hecho de que la actitud política no es tanto una cuestión de clase o efecto de circunstancias económicas como asunto ideológico cultural. En un país donde, por razones históricas que no es posible examinar aquí, la cultura democrática ha tenido un desarrollo muy precario, no puede sorprender que la demanda de democracia política comience apenas a desplegarse con intensidad. La propia izquierda, con su menosprecio por la democracia formal, no ha sido ajena a la lentitud con que se desarrolla este proceso.

Roger Bartra

Me parece indudable que cada día aumenta la presión popular por establecer la democracia política como forma de gobierno en México. De hecho, dado el sistema autoritario que padecemos, casi cualquier demanda de tipo social y económico conlleva una petición por democratizar la toma de decisiones y la elección de funcionarios. No hay prácticamente ninguna

protesta social que, explícita o implícitamente, no exija una ampliación de la democracia política. Incluso dentro del PRI hay una "corriente democrática" que quiere que las decisiones partidarias sean, al menos, transparentes. Sin embargo, el partido oficial continúa siendo el gran impulsor de la política del ocultamiento y de la opacidad.

Luis Javier Garrido

El "sistema" mexicano se apoyó históricamente en la débil cultura política de las mayorías, y su relativo éxito se fundó en que logró preservar ese atraso. Los gobernantes priístas pudieron sustituir con éxito a la población ciudadana porque se situaron en la tradición de ese autoritarismo paternalista que desde la dominación colonial caracterizó a las relaciones sociales en México. En la consolidación del régimen posrevolucionario, dos factores fueron por consiguiente esenciales: el hecho de que el partido del Estado careciera de espacios participativos y no se propusiera formar políticamente a sus bases sociales, y la labor de intermediación política que realizaron durante décadas los líderes sindicales. Tales prácticas contribuyeron de manera decisiva a la despolitización de la población.

Los gobernantes posrevolucionarios tuvieron, como se sabe, una profunda desconfianza de las masas populares, y la cultura política que buscaron imponer implicó de esta manera un rechazo a la idea de la pluralidad. La fuerza electoral del PRI ha sido por lo tanto, paradójicamente, el abstencionismo, fomentado desde el gobierno con la creencia de que las elecciones no sirven para gran cosa y de que los asuntos de importancia se deciden en otras instancias, política a la que contribuyó el hecho de que el sistema electoral fuese muy complicado. El abstencionismo en las elecciones no fue, empero desde la perspectiva de la sociedad, sino un mecanismo de resistencia cultural a esas formas de ejercicio del poder: que no se comprendían cabalmente pero con las que no se podía estar de acuerdo.

La cultura política de los mexicanos, como la de todos los pueblos, se manifiesta sin embargo no solamente en las contiendas electorales. El que amplios sectores de la población no deseen expresarse políticamente a través de las urnas no significa, como lo han pretendido los últimos gobiernos, que no estén preparados para ello, sino que el abstencionismo sigue siendo una forma de repudio a esas elecciones que de antemano se sabe que no son competitivas. Los casos históricos de muchos pueblos que, tras largos periodos de regímenes autoritarios, participan plenamente en procesos electorales democráticos, no son diferentes al de México. En múltiples aspectos de la vida social, los mexicanos han dado muestras de una voluntad participativa y de una madurez democrática, de eso que los sociólogos norteamericanos llaman "cultura cívica", no sólo en las luchas sindicales (huelgas, manifestaciones) sino en momentos críticos de la vida social (el 19 de septiembre).

Las recientes contiendas electorales municipales y locales muestran, por otra parte, que existe una población ciudadana con una voluntad de tener un gobierno, malo o bueno, pero que sea su

gobierno. En Juchitán o en Ciudad Juárez en 1986, habitantes no sólo de muy distintas latitudes sino de condiciones de vida muy diferentes, defendieron sus derechos político-electorales, acaso con diversos argumentos pero con una misma tenacidad que es ejemplo para toda la República.

Las luchas electorales no han sido más frecuentes porque buena parte de los dirigentes de los partidos políticos no han estado a la altura de la voluntad de luchar de la población. La circunstancia de que intelectuales de diversas tendencias coincidieran recientemente en la necesidad de instaurar en el país un régimen competitivo como una alternativa para evitar la violencia política, no constituyó más que un reconocimiento de que esa demanda está ampliándose. Esos casos de elecciones recientes en los que sectores de muy diversas capas sociales se movilizaron intensamente en una lucha electoral contra el PRI, y posteriormente por la defensa del voto, es un indicador que hay que tomar en cuenta: ese sentir, aún minoritario, muy rápidamente puede volverse mayoritario.

6

A partir de 1982, los procesos electorales manifiestan el fortalecimiento de Acción Nacional y el desempeño marginal de la izquierda, con pocas excepciones. ¿Cuál es su opinión sobre las causas, la durabilidad y los efectos probables de esta tendencia?

Carlos Pereyra

El PAN es la única fuerza que durante casi medio siglo se ha empeñado, así sea de modo hartamente unilateral e insuficiente, en defender el respeto al voto y en denunciar la manipulación de los resultados electorales -aunque también con frecuencia hace demagogia irresponsable al respecto. Cuando la hegemonía priísta empieza a hacer agua por todas partes, no es extraño que el PAN resulte el principal beneficiario de la paulatina erosión del partido oficial. La credibilidad democrática del PRI es prácticamente nula y algo semejante ocurre con los partidos de izquierda, a los cuales no sólo se les identifica —con buenas razones— con los regímenes autoritarios del socialismo real, sino que también en su propio discurso y en su práctica política misma aparecen distanciados de los valores democráticos. En tales circunstancias, es natural que cuando la demanda democrática se coloca en el centro de atención de núcleos cada vez más amplios de la población, el PAN salga fortalecido.

Por otra parte, la preocupación democrática está ligada en los diversos países a situaciones distintas. En el cono sur, por ejemplo, se conecta con la cuestión de los derechos humanos. En México, en cambio, está vinculada a la crisis económica. Es particularmente significativa, por tanto, la imagen social que se tiene de la crisis y de las causas que la produjeron. Según la imagen más difundida en la sociedad mexicana, la crisis es producto del mal gobierno y de la estatización de la economía. Estatismo y socialismo aparecen identificados ante la opinión pública y, debe

reconocerse, hay una crisis del estatismo en el mundo entero. Si crisis y democracia constituyen un solo paquete ante los ojos de mucha gente y, por otro lado, crisis y estatismo son vistos por muchos como una y la misma cosa, entonces se entiende el fortalecimiento de quienes se oponen al estatismo (PAN y también PDM) y no de quienes aparecen como sus impulsores (la izquierda).

Por último, en los procesos electorales es decisivo el arraigo social de los partidos en todo el territorio nacional. En numerosas localidades del país la izquierda (y esto es también cierto para la derecha aunque en menor medida) no está en condiciones siquiera de presentar candidatos o de tener representantes en todas las casillas. Ésta es la simple traducción en el plano electoral de su escasa implantación en la vida nacional. Basta esta circunstancia para explicar su desempeño marginal en las elecciones, más allá de las bondades supuestas o reales de su programa ideológico y político. Esta tendencia sólo podrá revertirse de manera lenta y a condición de que la izquierda logre difundir otra imagen social de la crisis, sea capaz de reformar sus creencias acerca de las relaciones entre Estado y sociedad, así como entre cultura y política, y consiga formular un proyecto para la nación.

Roger Bartra

La izquierda mexicana es la fuerza que ha acumulado las mejores tradiciones democráticas, y es la responsable de haber puesto en el orden del día -desde 1968- el tema de la democracia política. Desgraciadamente la izquierda ha desgastado su caudal en vanos esfuerzos por traducir las demandas democráticas en programas y proyectos destinados a ofrecer al pueblo una alternativa de política socioeconómica. Con ello ha dilapidado una fuerza histórica acumulada: ha rebajado la política a la economía, y ha reducido la democracia a la queja. Sin duda la profunda crisis económica ha contribuido a que esto ocurra: se ha creído, equivocadamente, que era el momento de enarbolar como bandera principal un programa de alternativas económicas para ofrecer al pueblo una salida a la crisis. Pero cualquiera puede adivinar que la medicina ofrecida por la izquierda sería poco eficaz, y la gente desconfió de los curanderos rojos que ofrecían salidas milagrosas.

La derecha, cuyo programa económico es confuso y muy similar al que aplica el gobierno, ha puesto el acento en cambios en los modos concretos de gestión política y en los "estilos de gobernar": detener la corrupción, transparencia administrativa, respetar el voto, etcétera. A un nivel ciertamente embrionario y primitivo, ha impulsado una cultura cívica de lucha por objetivos políticos muy precisos y limitados. La derecha ha logrado quitarle a la izquierda las banderas de la lucha civil por la democracia política.

La izquierda parece principalmente preocupada en lograr su unidad, para fusionarse orgánicamente en torno a un programa. Ha desdeñado la lucha por impulsar una nueva cultura política democrática, para dedicarse en cambio a las añejas tareas de construir un partido y un programa. Hoy la izquierda mexicana padece una verdadera indigestión de programas, estatutos,

proyectos y modelos; ha puesto un énfasis excesivo en la organización y en la unificación, y se ha alejado de los movimientos que sacuden a la sociedad civil. La izquierda se consume haciendo política hacia adentro en detrimento de una política expansiva y extrovertida. La izquierda sufre de un curioso narcisismo político: no deja de mirarse a sí misma, de autocriticarse o autoalabarse, de definirse siempre en relación a sí misma, de contemplar la historia de sus derrotas y de sus mártires, de lamentar su condición y de exaltar su futuro. Esta izquierda autoorganizada y autounificada prefiere pelear en un congreso que publicar una revista, goza más unos estatutos que un buen libro, prefiere un programa que un movimiento, gusta más de una concertación controlada que una arriesgada zambullida en la vida cotidiana. En estas condiciones es comprensible que no se amplíe significativamente su horizonte electoral: los militantes parecen más interesados en captar y reorganizar militantes ya convencidos, que en ganar nuevos votos para sus partidos. Los procesos de fusión que se observan en la izquierda son, en realidad, expresiones de un dramático fracaso y de la crisis interna que corroe a los partidos. Cuando se detenga la pasión programática, se apacigüen las ansias unificadoras y se redescubra la vida política real, tal vez la izquierda podrá ampliar su espacio electoral. Espero que ello ocurra antes de las elecciones de 1988.

Luis Javier Garrido

Las elecciones en México nunca han sido competitivas, por lo que su interpretación no debe hacerse tomando sólo en consideración los datos oficiales. Las cifras electorales no son confiables porque la votación por los candidatos del PRI se ha abultado de manera sistemática, pero si algo muestran es indudablemente un descenso paulatino de la votación por los candidatos oficiales. Esto se debe en lo esencial a dos factores: a] en primer lugar, a que la creciente participación de los partidos de oposición en la vigilancia y el desarrollo del proceso electoral hace que el fraude sea cada vez menos fácil; y b] en segundo término, a que los mecanismos priístas de control sobre aquellos grupos organizados a los que se llevaba a votar se han debilitado porque la política de "gestoría" priísta no puede responder más a las demandas de sus afiliados, y los "promotores del voto" no son una solución: el llamado "voto verde" o voto campesino, por el cual los líderes agrarios sustituyen a sus afiliados, es ya menos de la mitad del padrón, y el voto de los maestros del SNTE y de otros grupos sindicales, apoyados por locatarios de mercados y tianguistas, no puede hacer frente a la creciente participación de otros sectores de la población y en particular de las capas medias urbanas.

El Partido Acción Nacional ha sido sin duda el único partido político mexicano en mostrar desde su constitución un avance electoral. Tomando como punto de referencia las elecciones legislativas, el PAN ha mostrado un crecimiento incesante, pero desde las primeras elecciones en que participó, y no desde 1982. De los 21 mil votos que se le reconocieron en las elecciones legislativas intermedias del sexenio avilacamachista (1943), a los casi tres millones que obtuvo en las elecciones intermedias del sexenio delamadridista (1985), no ha dejado de crecer: ha pasado del 4.52% de la votación total al 15.50%. El avance que ha tenido en particular desde

1964, año en que llegó al 11.52%, ha sido sostenido con un solo bache: las elecciones de 1976, en las que no presentó candidato presidencial, lo que prueba por otro lado que las legislativas siguen teniendo un interés muy secundario.

En algunas elecciones locales, el PAN empezó a ser por otra parte un partido competitivo. Desde fines de la década de los sesenta, el gobierno federal tuvo que recurrir a burdos fraudes para impedirles ganar a sus candidatos a gobernadores en Baja California Norte en 1968 y en Yucatán en 1969. En las elecciones municipales, desde que un panista ganó la presidencia municipal de Quiroga (Mich.), en 1946, y otro la de una capital estatal, Mérida (Yuc.) en 1967, sus triunfos han sido cada vez más frecuentes. Y en las presidenciales, su avance ha sido también sensible: Efraín González Luna obtuvo el 7.82% de la votación total en 1952, Luis H. Alvarez el 9.42% en 1958, José González Torres el 11.05% en 1964, Efraín González Morfín el 13.85% en 1970 y Pablo Emilio Madero el 15.68% en 1982. Cuando llegó la reforma político-electoral de 1977, el PAN pudo beneficiarse por lo tanto no sólo de su antigüedad, sino de su mejor disposición a hacer una oposición electoral. Lo que cambió a partir de 1982 fue que sus dirigentes hicieron de Acción Nacional un partido con voluntad de triunfo, lo cual constituyó un precedente en la historia electoral reciente del país: por vez primera un partido de oposición se presentaba como una verdadera opción. En el discurso de sus dirigentes, el blanquiazul fue un partido competitivo, que participaba para ganar. La fuerza del PAN dista sin embargo de ser lo que afirman sus impugnadores: a principios de 1987, Acción Nacional tenía 41 diputados federales (9 de mayoría relativa y 32 plurinominales) de un total de 400, ninguno de los escaños en la Cámara de Senadores, ni una sola de las 31 gubernaturas estatales, 58 diputados locales (3 de mayoría y 55 de representación proporcional) de un total de 653 y 18 presidencias municipales de los 2377 municipios en que está dividido el territorio de la República (en los que tiene asignados 467 regidores de representación proporcional).

Los partidos de izquierda, por el contrario, tienen un problema central: sus dirigentes no han estado a la altura de la aspiración de hacerlos competitivos en el plano de las elecciones, ni de las luchas que sus militantes han librado a nivel local. La izquierda mexicana está pagando en los años de la crisis el desdén que tuvo durante décadas por los procesos electorales. El doble peso que tienen en sus partidos las herencias leninista y lombardista es aún muy grande, y un buen número de sus miembros siguen desdeñando las elecciones; unos porque las consideran como un mecanismo que no sirve para alcanzar el poder político, y otros porque piensan que su función es únicamente presionar al gobierno, con el que buscan continuamente una serie de alianzas. La progresión electoral de la izquierda en las últimas elecciones legislativas ha sido de tal suerte muy limitada. En 1979, el PCM recibió el 4.86% de los sufragios emitidos, en 1982 el voto total para la izquierda fue de 5.83% (4.37% para el PSUM, aunado al 1.27% para el PRT y el 0.19% para el PSD), y en 1985 no aumentó sino al 6.03% (3.22% para el PSUM, 1.26% para el PRT y 1.55% para el PMT, que se benefició evidentemente del mismo electorado).

La tendencia al crecimiento electoral del PAN halla su principal explicación en el hecho de que

se ha comportado como un verdadero partido de oposición; esto es, oponiéndose a las tesis y a las prácticas del PRI, lo mismo en las campañas electorales y en las cámaras de diputados federal y locales que en la prensa: hablando el lenguaje propio de la oposición en cualquier país. Los partidos de izquierda han estado a su vez más preocupados por mostrar sus convergencias que sus divergencias con el poder, en dialogar con éste antes que en contradecirlo, rehuendo la confrontación: han actuado más en términos de colaboración que de oposición. De tal manera que su credibilidad en amplios sectores de la población es reducida. No han podido desarrollar una oposición vigorosa y competitiva, con programas claros: que sea una alternativa de gobierno a nivel nacional y local, tanto al poder priísta como al PAN.

Las dos tendencias fundamentales en los próximos años seguirán siendo, sin duda, la lenta pero progresiva disminución de la votación real en favor del PRI, y el paulatino incremento del voto por la oposición, proveniente en particular de aquellos sectores de la población que empezaron a considerar que el voto por el PAN es el más efectivo para propiciar un cambio. Todo ello se enmarcará sin embargo en una tercera tendencia: la del abstencionismo, que ha sido y tiende a seguir siendo la característica fundamental de todos aquellos procesos electorales en los cuales la oposición no es competitiva. Desde tal perspectiva, en el caso de que la izquierda no logre ser una oposición electoral fuerte, la pérdida de hegemonía del PRI obviamente beneficiaría sólo al PAN, lo cual sería muy grave para el futuro de la democracia en México.

La tendencia hacia un escenario bipartidista PRI-PAN, en el que los partidos de la izquierda desempeñen un papel de comparsas al igual que los partidos paraestatales (PPS, PARM, PST), no podrá ser frenada sino por una gran movilización política de las fuerzas populares cuyos dirigentes, con audacia e imaginación, en muy poco tiempo deberán dar un salto de años.

Rubén Jiménez Ricárdez

Parece que bajo el cielo electoral mexicano pueden ocurrir los mayores extravíos. Es el caso de un sector de izquierda que, en los últimos tiempos, vive temeroso (y ha querido infundirle miedo a todo mundo) ante la que considera inminente instauración de un sistema bipartidario sustentado en el crecimiento electoral del PAN. Quienes así opinan han perdido capacidad interpretativa, sentido de la realidad y de las proporciones casi en el mismo grado que han perdido decisión y energía para representar los intereses populares y encabezar y fomentar el descontento. Para proponer esa cuestión con propiedad, habría que comenzar preguntándose si un régimen político tan rígido como el mexicano puede admitir —en ausencia de grandes convulsiones y sólo por obra de ciertos resultados electorales— la alternancia de partidos gobernantes. Ya Miguel de la Madrid, enfáticamente, negó esa posibilidad, alegando como motivo nuestra inmadurez cívica. Pero no hacía falta la despectiva palabra presidencial para descubrir la falsedad de aquel aserto de una izquierda. Este régimen político, marcadamente centralista, en donde las partes se subordinan al vértice —la presidencia de la República—, no puede permitirse la instalación, en sus espacios claves, de una fuerza disidente que se volvería disolvente al engendrar inestabilidad. En las pocas

ocasiones en que una corriente opositora pareció haber ganado una gubernatura, el régimen se valió de cualquier medio para conjurar tal situación. Al triunfar Jacinto López en Sonora, en 1949, el ejército y la policía acosaron a las masas que lo seguían con el fin de someterlas, mientras en México Lombardo Toledano, dirigente del partido que había ganado aquellas elecciones, contemporizaba con las razones del gobierno. Igualmente vencido resultó Gascón Mercado en 1975, porque su victoria electoral en Nayarit la cambió Cruickshank, secretario general del PPS, por una senaduría para sí, con lo cual, lleno de oprobio, aparece en los anales como el único senador de "oposición" desde que existe el partido del Estado. Aún más: la COCEI -una corriente radical y popular-, que había logrado conquistar legalmente el ayuntamiento de Juchitán, se vio expulsada del municipio por la fuerza de las armas. La izquierda a la que aludo, por otra parte, no ha encabezado la inconformidad en el espacio de la lucha social, pero tampoco en el territorio electoral. Sin iniciativa para combatir al PRI y al gobierno, su obsecuencia se tradujo más de una vez en garrafales errores políticos e ideológicos. Desdibujada, cautelosa, obsecuente, esa izquierda cosecha en marginalidad electoral lo que ha sembrado. ¿Y el fortalecimiento electoral del PAN? En su origen, como ya dije antes, se encuentra una fractura intercapitalista. Pero, además, el PAN practica una táctica electoral decidida y beligerante. Sin demasiadas contemplaciones se lanza contra el presidencialismo, contra el PRI y los fraudes electorales, contra la antidemocracia imperante, contra la corrupción. Logra con ello representar una parte del descontento social, porque esgrime la lucha contra lacras reales. Ha contado a su favor, también, con el apoyo de la jerarquía clerical de derecha y, en algunos lugares, con un discurso de tintes carismáticos y con dirigentes enérgicos incluso imbuidos de un curioso sentimiento mesiánico. Con todo, el crecimiento electoral del PAN es relativamente escaso, regionalmente localizado y orgánicamente débil. Hasta ahora es insuficiente para abrirle el acceso a oposiciones conspicuas de gobierno: ni gubernaturas, ni un crecido número de presidencias municipales en algún estado, ni la presidencia. Ni aun en Chihuahua pudo juntar y mantener en movimiento una fuerza de tal envergadura que obligara a ver su triunfo como inobjetable. Y, en el caso de que lograra todo lo que vengo diciendo, aún tendría que defender enérgicamente esa hipotética victoria. ¿Cómo lo haría enfrentado a un fuerte acoso del ejército y la policía y ante las asechanzas del PRI y del gobierno? Vale la pena pensar con responsabilidad en una hipótesis semejante: a principios de siglo, demandas no muy diversas a las de ahora del PAN, encendieron la chispa de la revolución. Hoy, sin embargo, la fractura intercapitalista mencionada logró resanarla, hasta cierto punto, el grupo hegemónico: tanto en Sonora y Nuevo León como en Sinaloa y Chihuahua, sitios candentes del enfrentamiento. Lo consiguió por la vía de grandes concesiones materiales y abriendo los puestos políticos a representantes directos o muy ligados a las facciones de capitalistas disidentes. En fecha más cercana, para resoldar la unidad de la cúpula capitalista y abonar con ello el terreno para el próximo destape presidencial, el grupo gobernante entregó estratosféricas ganancias a través de la venta de los Certificados de Aportación Patrimonial bancarios.

Pero lo dicho hasta aquí no anula la importancia política de las elecciones estatales anotadas, en particular de las chihuahuenses. Estas últimas lesionaron aún más la ya menguada credibilidad

del régimen, esto es, ahondaron su crisis de legitimidad. Y, tal vez, aumentaron el caudal del relativamente amplio movimiento ciudadano que en el último periodo combate contra el imposicionismo gubernamental y por el respeto al voto.

Adolfo Gilly

Las reales posibilidades de crecimiento masivo de una izquierda mexicana están relacionadas con los procesos posibles de crisis de la dominación del PRI y de desgajamiento de trozos enteros de su aparato y de las fuerzas que aún controla así sea pasivamente. Las fuerzas de masas potenciales de la izquierda están todavía aprisionadas dentro del PRI. Esto no significa que síntomas como la Corriente Democrática de Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo sean los liberadores de esas fuerzas; pero sí que su aparición debe contarse entre los indicios precursores de crisis mayores en los actuales modos de dominación política.

7

Considerando las características legales y reales del sistema electoral mexicano y el recurso, frecuentemente denunciado, al fraude electoral, ¿cuál es su expectativa respecto a la viabilidad de la ampliación democrática?

Luis Javier Garrido

La ampliación democrática no será desde luego consecuencia de una generosa concesión del gobierno sino de las luchas del pueblo mexicano: ningún régimen se autoliquida y el de México no tiene por qué hacerlo. El "sistema" político, con todo lo que implica en las prácticas del poder público, en las relaciones sociales y en la vida cotidiana de los mexicanos, no va a ceder si no es mediante una vasta movilización de amplios sectores de la población.

El "sistema" mexicano es por esencia antidemocrático al negar la posibilidad de la alternancia, pero a pesar de que las leyes reglamentarias de los procesos electorales federal y locales están amañadas, y son ejemplares por su antidemocracia, existen reales espacios de participación política. Éstos permiten una lucha electoral en condiciones ciertamente desfavorables, pero la historia reciente nos muestra cómo algunos regímenes no democráticos se quebraron en un contexto aún más adverso para la oposición que el mexicano. El Código Federal Electoral de 1987, que configuró una serie de pasos atrás en relación a la LFOPPE de 1978, centralizando con mayores controles el proceso electoral en manos del presidente de la Comisión Federal Electoral (que es el Secretario de Gobernación); despenalizando una serie de ilícitos, cerrando la vía de los recursos ante los fraudes, y creando en general condiciones más propicias para las manipulaciones delictivas, limita sin duda la libertad de participación política: pero aun así puede ser posible que se quiebre el antidemocrático "sistema" mexicano, con el concurso de todas las

fuerzas democráticas.

El gobierno mexicano ha recurrido de manera sistemática al fraude, lo mismo en elecciones locales conflictivas (como las de Sonora y Nuevo León en 1985 y las de Durango y Chihuahua en 1986) que en elecciones relativamente fáciles (como las de Campeche y Tlaxcala en 1986 o las de Quintana Roo en 1987), por un lado porque la participación electoral ha aumentado en los casos en los que la oposición presenta alternativas competitivas y, por el otro, porque en aquellas ocasiones en las que no lo hace, el voto priísta es tan raquítico que no puede legitimarse a los candidatos oficiales si no es falseando la votación. El problema no se limita sin embargo, como pudiera pensarse, a los comicios locales, sino que incluso en elecciones federales, como las legislativas de 1985, fue también perceptible que el fraude orquestado por las autoridades constituía una necesidad para el régimen.

La viabilidad de la ampliación democrática dependerá por consiguiente de la lucha que se haga por alcanzar una transparencia del proceso electoral. Los ilícitos en la materia, no hay que olvidarlo, lo mismo las presiones que las manipulaciones, constituyen delitos graves en contra de los derechos políticos del pueblo mexicano, y no deben situarse en el terreno de la picaresca, por muy jocosas que puedan parecer algunas situaciones que se presentan. La noción de "fraude patriótico", divulgada por los priístas para justificar la violación a los derechos políticos de las poblaciones del norte del país, no logra encubrir que estos ilícitos se cometen no en contra de un partido político en particular sino de la ciudadanía, con el argumento falaz de que carece de madurez política. Es por este motivo que tales delitos deberían ser perseguidos de oficio por las autoridades y no, como mañosamente lo pretenden éstas, a petición de parte, esto es, de los agraviados, que son tanto los partidos como los ciudadanos. En el caso de México, la paradoja la constituye el hecho de que la mayor parte de estos ilícitos tienen un carácter oficial, ya que son cometidos por funcionarios lo mismo del Registro Federal de Electores y de la Comisión Federal Electoral que de los gobiernos federal, local y municipal, y esto los hace mucho más difíciles de probar. Las presiones ilícitas, que son tan graves como las manipulaciones, están sin embargo a la vista de todos, y los partidos de oposición han sido negligentes en denunciarlas. Bastarían los videos de las informaciones preelectorales vertidas por Televisa e Imevisión en sus cadenas nacionales y sus emisoras locales, lo mismo de comicios federales y locales que municipales, para probar que estuvieron viciados de origen y pedir su anulación: las presiones tipifican también el delito de fraude electoral.

La democracia electoral no podrá establecerse si no se da una lucha concertada de todos los partidos independientes en contra de los ilícitos: esto es, en defensa de un régimen de derecho. Estimar que las condiciones prevaecientes hacen inútil cualquier participación electoral equivale a propiciar el abstencionismo que, como se sabe, sólo favorece al PRI: sería abandonar uno de los espacios de lucha fundamentales para la transformación del país.

Rubén Jiménez Ricárdez

La pregunta se refiere por supuesto a la democracia electoral. Más arriba ya he dicho algo a este respecto, y aquí sólo quiero añadir algunas precisiones. El lento proceso de destrucción del pacto social sobre el que se apoya, y las tensiones que de allí se derivan, obligaron al régimen a abrir algunas válvulas de seguridad con el fin de canalizar la protesta (o parte de ella) por vía institucional. Permitted que se ensanchara, sobre todo, la libertad de expresión; y, más limitadamente, también las libertades de manifestación y organización. Concedió, asimismo, la reforma política. Puede documentarse, es cierto, una acción represiva continua y una sistemática reducción legalizada de los derechos de los trabajadores del campo y la ciudad. Pero es válido hablar de una relativa "ampliación democrática", si nos apresuramos a calificarla: rigurosamente vigilada y controlada, se derrama gota a gota. Es lo que sucede, por ejemplo, con ese reciente simulacro de democracia: la asamblea de representantes para el DF. Arrebatarse al régimen, desde abajo, una mínima concesión, generalmente cuesta inenarrables esfuerzos: piénsese en los indios que casi tuvieron que morir en huelga de hambre antes de obtener la graciosa dádiva de que los recibiera De la Madrid; o en las humillaciones, el asesinato de uno de los suyos, la prolongada huelga de los maestros de Chiapas, todo lo cual no bastó para vencer la arbitrariedad de los charros del SNTE (y del gobierno). Pero la minúscula apertura democrática que disfrutamos no se originó en una desinteresada concesión estatal. El grupo hegemónico la concibió como estrategia de contención y de diversión, con carácter preventivo (la reforma política); o, como en el caso del derecho de manifestación, no tuvo más remedio que admitir la expresión abierta del descontento, porque tratar de contenerla por la fuerza habría implicado un costo político mayor y una mayor elevación de las tensiones.

Con todo, es innegable que también en el plano electoral la tensión crece. Allí se trenza otro de los nudos gordianos del contexto político de México. Porque, en mi opinión, dentro de los marcos del régimen imperante no hay espacio siquiera para la democracia electoral. Sin la quiebra del PRI y el sustancial debilitamiento del presidencialismo, es ilusorio suponer que pueden alcanzarse, al menos, los siguientes modestos objetivos: libre concurrencia de partidos, respeto irrestricto al sufragio, transparente calificación de las elecciones por una instancia no gubernamental, funcionamiento autónomo de los tres poderes constitucionales. Sin todo ello no existirá la democracia electoral. Y no puede implantarse sin el concurso de la mayoría de los mexicanos. Sin embargo, es evidente la desvinculación entre el movimiento cívico y la lucha que por construir la democracia desde abajo y por eliminar el control priísta se despliega en los espacios básicos en donde transcurre la vida del pueblo. "Ampliar la democracia", en consecuencia, sólo puede lograrse uniendo la fuerza de la mayoría. Pero la convocatoria electoral es insuficiente para encender en ella una profunda pasión creadora; es preciso partir de sus necesidades, de sus intereses y sus aspiraciones. Sin ello, ningún tipo de democracia será posible en México.

Adolfo Gilly

Pese a todos los signos negativos, creo que son innegables los procesos complejos de ampliación democrática en México. Habrá choques, enfrentamientos y endurecimientos, pero medida como proceso de cambio de una relación social, la ampliación democrática me parece una realidad, no sólo en la relación del poder con los ciudadanos, forzada a cambiar, sino también en la relación de los ciudadanos entre sí. Se han ampliado, aun trabajosamente, los espacios de tolerancia, así sea a través de un interminable forcejeo. No veo esos espacios tanto en el parlamento o en la existencia legalizada de organizaciones políticas, cuanto en la vida social misma. Sin embargo, seguimos aún enormemente por detrás del punto definitorio de la existencia de un régimen democrático: no tanto el sistema parlamentario o el respeto al voto, cuanto la existencia de un sistema de justicia independiente del poder político y de jueces en quienes los ciudadanos puedan confiar ya sea en sus litigios con el Estado o en sus pleitos privados. No está de más recordar que la justicia, y el sistema jurídico en que ésta se basa, son un motivo central de cualquier revolución, pero también de cualquier ampliación de la democracia en un país determinado.

Roger Bartra

Una verdadera extensión de la democracia sólo podrá venir después de un cambio profundo del sistema electoral y después de la liquidación de los mecanismos cuasi institucionales del fraude. Estos cambios sólo ocurrirán como consecuencia de una crisis política.

Mientras tanto, seguirán existiendo en el país vastas áreas totalmente controladas por el gobierno. Se trata principalmente de las regiones rurales y de distritos electorales en los que la oposición no está presente y en donde se aplican todas las formas posibles de "alquimia" electoral. En este océano de fraudes y manipulación hay algunos archipiélagos donde la formalidad democrática es respetada y donde la oposición ha logrado avanzar significativamente. Estos enclaves democráticos aún no son suficientes para garantizar que se pueda producir a escala nacional una ruptura de la hegemonía priísta y, por tanto, que pueda generarse una transformación del sistema político.

Carlos Pereyra

El nuevo código electoral establece ciertos mecanismos (como el tribunal contencioso, por ejemplo) que ayudará a disminuir las posibilidades de fraude. Al mismo tiempo, introduce condiciones propiciatorias del fraude como, por ejemplo, la mayor centralización en el nombramiento de los funcionarios encargados de organizar las elecciones. Más allá de las características legales del sistema electoral, son los rasgos reales del sistema político mexicano los que permiten prever la continuidad del fraude, debido a una doble circunstancia: varios indicadores sugieren que la votación priísta tenderá a disminuir en el futuro y, sin embargo, el sistema de gobierno en nuestro país es incompatible con la presencia de otro partido en el gobierno del Estado. Dada la forma actual del Estado mexicano, aquí no puede ocurrir, como en otros países, la sustitución de un partido gobernante por otro.

El grado de ampliación democrática logrado hasta ahora en el mundo, en ningún país hace factible la conquista electoral del gobierno por cualquier partido. En todas partes esta posibilidad esta todavía restringida a cierto tipo de formaciones políticas. Sin embargo, en sociedades donde opera un partido del Estado, como es el caso de México, esa posibilidad se restringe al mínimo: un solo agrupamiento político puede gobernar. La ampliación democrática en nuestro país pasa, pues, por la reforma del Estado. Esta tarea supone un esfuerzo dirigido no tanto a la denuncia del fraude como a la organización social para evitarlo. Hay un abuso del discurso denunciatorio, como si la existencia del fraude no fuera algo susceptible de ser corregido por la sociedad misma. El ejemplo reciente de Chihuahua es apenas un anuncio de las inmensas perspectivas que abre la participación decidida de la sociedad en cuestiones electorales.

8

Se ha hablado de la posibilidad de una crisis del sistema político mexicano. Aunque este juicio no está generalizado, son visibles crecientes tensiones en relación con procesos electorales regionales. Considerando los distintos futuros de la democracia ¿cuáles son los "escenarios" posibles de la situación política mexicana hacia finales de esta década?

Rubén Jiménez Ricárdez

Hacia finales de esta década continuarán operando las tendencias que ya he identificado en respuestas anteriores. Sin duda, no nos encontramos en presencia de una crisis política, si por ello se entiende el surgimiento de crecientes dificultades para el ejercicio hegemónico del poder, hasta tal punto que logren trabar el funcionamiento de sus mecanismos regulares. Pero no es dable descartar su aparición en el horizonte. Podría ocurrir si alguna —o, simultáneamente, varias— de las dichas tendencias se acentúa o amplía. Por ejemplo, si se generaliza la movilización de masas y logra afectar espacios estratégicos de la dominación —si, además, la izquierda supera sus errores, reorienta sus acciones, arraiga entre los dominados y los dota de dirección—; o, también, si llegara a recrudecerse la lucha intercapitalista hasta el grado de provocar una gran fractura en el bloque dominante, que repercutiera sobre el gobierno, el PRI y el ejército.

Así podrían elaborarse distintos escenarios hipotéticos a partir de las tendencias señaladas. Se podría también recurrir a tendencias más profundas y de mayor alcance histórico, y argüir que en los periodos cruciales, en los momentos decisivos, el pueblo mexicano ha salido a tomar en sus manos la resolución de los problemas nacionales, y que supo engendrar desde su seno los dirigentes de los que carecía. Pero si de suyo es difícil responder una interrogación sobre el futuro político, la dificultad crece cuando la pregunta se formula desde la ausencia de proyecto histórico colectivo y ante la carencia de fuerzas dispuestas a realizarlo: ambos, requisitos ineludibles de cualquier gran realización política, como la que se requiere para desatar o para cortar, a favor de

las mayorías, los intrincados nudos de nuestro presente. Con un pueblo que lucha pulverizado, y con una izquierda prácticamente aniquilada, sólo puedo ver un ominoso futuro político inmediato. Algo se gesta sin duda en lo profundo de las masas mexicanas, pero todavía es un cambio en elaboración: identificar sin falla esa tendencia, contribuir a profundizarla y extenderla, fomentar la orientación a desarticular al PRI desde abajo, es el mejor modo de enraizar que los revolucionarios tienen al alcance de sus fuerzas. Pero requieren, asimismo, desarrollar un proceso de reagrupamiento y de reformulación autocrítica. Son requisitos indispensable, para ello, pensar y hablar en mexicano y rescatar la tradición heroica de nuestro pueblo. Operación que no puede realizarse sin tirar el lastre de una mala tradición "comunista" y autoritaria; sin transformar el lenguaje, abandonando sin dudas

los estereotipos, las fórmulas consagradas, las definiciones herméticas, las palabras sagradas: "leninista", "comunista", etcétera; sin reapropiarse más bien del contenido profundo de intransigencia moral y revolucionaria que tales términos, definiciones y fórmulas tuvieron antes de verse transformados en invocaciones rituales. Pero se impone, también, apropiarse de una tradición fecunda: del contenido libertario y democrático del marxismo de Marx, que éste fundó en premisas materiales, pero asimismo en sólidas bases de cultura y moral; de la innegable tradición democrática y revolucionaria del pueblo mexicano, inscrita ya en el hecho irrefutable de que con su actuación multitudinaria y decisiva (y no hay más ejemplar demostración democrática que ésta) ha sido el verdadero creador de México desde la revolución de independencia.

Pero si nada perturba, reorientándolas, las tendencias profundas de la recomposición capitalista, éstas continuarán tejiendo la trama y menos democrático. Para la mayoría, México fue siempre un país atroz; ahora tiende a convertirse en un infierno.

Roger Bartra

Las elecciones de 1988 serán una coyuntura crítica para el sistema político mexicano. Es previsible una gran agresividad del PAN, que procurará generalizar las experiencias que ha tenido en el norte del país. Es previsible también el fraude en gran escala, y por tanto un enervamiento político extremo. Se presentará un peligro: que los partidos de orientación socialista se limiten a ser un contrapeso del lado izquierdo de la balanza política, para permitir que la oposición de derecha independiente sea controlada por el gobierno con cierto grado de legitimidad. Si ello ocurre, será la izquierda política la que pierda legitimidad y se verá enfrentada a una izquierda civil que cada vez con más fuerza critica a las formas institucionales de hacer política.

Si la izquierda pierde el miedo a la crisis política y se decide a abandonar las concertaciones programáticas, los populismos nacionalistas y los economicismos leninistas, podrá hacer una campaña electoral imaginativa y agresiva. Es posible que las de 1988 sean las últimas elecciones que ocurran bajo el manto del sistema de manipulación institucional. Será así en la medida en que las elecciones coincidan con una crisis política profunda, que ensanche las grietas que atraviesan

al gobierno y que rompa el monolitismo priísta. Para que la crisis sea fructífera y tenga una salida democrática, me parece de fundamental importancia que la posición priísta vea cerradas todas las salidas políticas, tanto las que haya su derecha como las que haya su izquierda. En Chihuahua el PRI encontró —hasta cierto punto— una salida hacia la derecha, lo que fue posible gracias a la extrema debilidad de la izquierda en esa región. En ocasiones anteriores —sobre todo en tiempos de Echeverría— el sistema dominante encontró salidas a la izquierda, también gracias a la debilidad de la derecha.

El oportunismo será una tentación tanto para la izquierda como para la derecha: cualquiera que ayude a sacarle las castañas del fuego al gobierno será sin duda bien retribuido. Pero es posible que hayan pasado los tiempos de la corrupción política generalizada, y que sólo unos cuantos socialistas de derecha y unos pocos conservadores de izquierda se decidan a mantener la confusión política.

Luis Javier Garrido

El "sistema" político mexicano no es sino la expresión de la lógica de poder de los gobernantes que se ha consolidado en el último medio siglo, frente al régimen legal previsto en la Constitución de 1917 y en sus leyes reglamentarias. Entre el "sistema", fundado en un partido de Estado y en sus prácticas y su cultura de antidemocracia (las reglas "no escritas"), y el régimen de derecho, que es urgente establecer plenamente en el país, y en particular en materia político-electoral y sindical (las "reglas escritas"), media sin duda toda una serie de luchas sociales que habrán de librarse en los años próximos.

Ese "sistema" de gobierno, autoritario y paternalista, cuya fuerza se cimentó desde los años cincuenta en un desarrollo económico con desigualdades y en la capacidad de mediación de los aparatos del Estado, constituye indudablemente una "camisa de fuerza" para la sociedad mexicana, y las múltiples resistencias a sus prácticas, desde dentro y desde fuera de las organizaciones oficiales, en el terreno electoral y fuera de éste, no son sino evidencias de que amplios sectores del país aspiran a otras normas de convivencia, a prácticas políticas diferentes y a relaciones sociales distintas: a una "modernidad" que, con todas sus virtudes y defectos, la han conocido ya otros países latinoamericanos, y que tiene sus normas escritas. La crisis del "sistema" mexicano no puede significar por consiguiente sino la multiplicación de las resistencias a los abusos del poder fundados en esas normas "no escritas" de nuestra tradición política: en la búsqueda de un estado de derecho. El escenario más probable es por consiguiente el de los inevitables conflictos que conlleva la lucha por un régimen democrático que en el aspecto electoral sea competitivo: fundado en un multipartidismo no tan sólo de derecho sino también de hecho. En un régimen plural es evidente que el PRI dejaría de ser lo que históricamente ha sido, y que por lo tanto los millones de mexicanos que han sido afiliados colectivamente a sus filas y están impedidos para hacer política podrían escoger libremente el partido de su militancia o de su simpatía: por lo que las resistencias al cambio van a ser muchas. Es un escenario para el cual la

izquierda política mexicana no está preparada, pero en el cual participarán muchos sectores de la población a pesar de los partidos políticos. Las luchas por la defensa del voto, como el rechazo a los mecanismos oficiales de negociación sindical, las tomas de tierras o las diversas formas de resistencia cívica de los últimos años, muestran bien que el "sistema" mexicano está alcanzando sus límites y que no es probable su renovación, la recuperación económica no implicaría necesariamente la recuperación política, como piensan muchos priístas.

El dilema de México seguirá siendo el mismo de las últimas décadas pero en condiciones mucho más difíciles para todos: los hombres en el poder deberán aceptar que el "sistema" priísta lejos de proporcionar "la estabilidad" genera la inconformidad, y que es necesario liberalizarlo aceptando la alternancia política y la libertad sindical, o de lo contrario las formas de resistencia democrática se tornarán violentas. El poder actual no va a quebrarse solamente por sus contradicciones, y esas luchas sociales y políticas, que implican necesariamente como objetivo el alcanzar un estado de derecho, se intensificarán seguramente a finales de la década. De las resistencias que surjan en el seno del "sistema" dependerá que el segundo escenario posible sea el de una confrontación por otros medios.

Carlos Pereyra

A pocos años de la terminación de la década de los ochenta, la pregunta interroga por los escenarios posibles después de las elecciones federales de 1988. Es muy probable que se profundice la escisión en el interior del PRI, así como las manifestaciones de descontento por la manipulación real o imaginaria de las elecciones, pues los mecanismos electorales todavía no permiten a la población tener la certeza de que las cifras oficiales expresan en forma correcta la voluntad ciudadana. Es probable también que la dispersión de la izquierda tienda a disminuir en virtud de los proyectos de unificación en curso. En cualquier caso, todavía será limitada la posibilidad de revertir la tendencia a la bipolarización de los votos, como será limitada también la posibilidad de volcar el descontento social en una clara expresión político-electoral.

Adolfo Gilly

Desde la revolución mexicana hasta hoy, el objetivo fundamental de los socialistas, la precondition de la organización de una corriente socialista de masas en el país, es lograr la independencia de los trabajadores manuales e intelectuales, urbanos y rurales, con respecto al Estado y a su partido, en los cuales desde la revolución y hasta hoy están integrados. Saber avanzar en la ruptura de esa integración o, lo que es lo mismo en la autorganización independiente del Estado y de sus subordinaciones, es la tarea central de una izquierda mexicana. Esto significa un trabajo teórico, político, cultural y organizativo, que va desde la refundación del marxismo y del socialismo mexicano en estos años de crisis y cambio hasta la asunción, como lo hicieron en su tiempo los magonistas, los anarquistas, los socialistas o los zapatistas, de la disputa por una cultura nacional que rompa esa dependencia y permita una nueva expansión de todas las

riquezas de la cultura. Mexicana y universal en México. Si lo que digo es demasiado ambicioso, no puede buscar menos que eso una corriente de pensamiento que se propone crecer en la sociedad y reorganizar duraderamente la vida nacional.

Todo en México está cambiando en estos años, más aceleradamente de lo que sospechamos. Creo que también debe hacerlo, en busca de horizontes más lejanos que la coyuntura de la crisis, la discusión sobre la democracia. Pero para cambiar en serio es preciso tener algunas ideas firmes, según hemos aprendido de cuantos han sabido preparar y vivir los cambios en este mundo.

Quienes están habituados a trabajar con ideas son personas que, por eso mismo, son sensibles a los cambios. Hay dos estirpes entre ellos, los que cambian con los tiempos y los que cambian con las modas. Como todos los seres humanos, ambas son fieles así a su índole última.